

NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONÓMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1984/30
3 de febrero de 1984

ESPAÑOL
Original; INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
40º período de sesiones
6 de febrero a 16 de marzo de 1984
Tema 12 del programa provisional

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y EN PARTICULAR EN
LOS PAÍSES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala,
preparado por el Relator Especial, Vizconde Colville of Culross,
de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 1983/37 de
la Comisión de Derechos Humanos, de 8 de marzo de 1983

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
1. INTRODUCCIÓN.	1.1 - 1.19	1
2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.	2.1 - 2.3	5
3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.	3.1 - 3.18	6
4. EL CONFLICTO ACTUAL.	4.1 - 4.14	10
5. IMPLANTACIÓN DE REFORMAS.	5.1 - 5.12.13	15
6. INDICIOS DE ABUSOS MO RESUELTOS.	6.1.1 - 6.6.10	26
7. PREOCUPACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	7.1.1-7.5.5	3"
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	8.1 - 8.10	47

~~Anexos~~

- I. Resolución 1983/100
- II. Antecedentes históricos, 1954-1982
- III. Itinerario del Relator Especial en Guatemala
- IV. Itinerario del Relator Especial en el Estado- de Chiapas (México)
- V. Itinerario del Relator Especial en Guatemala, noviembre de 1983
- VI. Departamento de promoción social rural (Guatemala)s proyectos finalizados y en ejecución

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La Comisión de Derechos Humanos examinó la situación de Guatemala en su 35º período de sesiones, en que aprobó la decisión 12 (XXXV) por la que decidió enviar un telegrama al Gobierno de Guatemala en relación con el asesinato del Dr. Alberto Fuentes Mohr, Diputado del Congreso de Guatemala, ex Ministro¹ de Relaciones Exteriores y de Hacienda y ex miembro de la Secretaría de las Naciones Unidas. El telegrama decía que la Comisión vería con agrado que se le informara respecto de esa cuestión.

1.2. En su 36º período de sesiones la Comisión tuvo ante sí para su examen una serie de documentos en los que figuraban informes de otros asesinatos ocurridos en Guatemala, así como las respuestas del Gobierno de ese país. El 11 de marzo de 1980 la Comisión aprobó la resolución 32 (XXXVI), titulada "La situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guatemala", en que la Comisión expresaba su honda preocupación ante la situación de los derechos humanos e instaba al Gobierno a que tomara las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos humanos del pueblo de Guatemala.

1.3. Asimismo, la Comisión tomó nota con satisfacción de la decisión adoptada por el Gobierno de Guatemala de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que visitara el país y preparara un informe sobre la situación de los derechos humanos, y decidió mantener en examen la situación en su 37º período de sesiones sobre la base de las informaciones recibidas de todas las fuentes pertinentes.

1.4. En su 37º período de sesiones la Comisión tuvo ante sí un documento (E/CN.4/1439) en el que figuraban informaciones recibidas de diversos gobiernos, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas y fuentes particulares, y aprobó la resolución 33 (XXXVII)*. En esta resolución se pedía al Secretario General que continuara sus esfuerzos por establecer contactos directos con el Gobierno de Guatemala y que reuniera información sobre la situación de todas las fuentes pertinentes.

5. En su trigésimo sexto período de sesiones la Asamblea General examinó un informe del Secretario General (A/36/705) sobre sus esfuerzos por establecer contactos directos con el Gobierno de Guatemala. El 16 de diciembre de 1981 la Asamblea aprobó la decisión 36/435t** la que pedía al Secretario General que continuara sus esfuerzos y al Gobierno de Guatemala que siguiera cooperando con el Secretario General.

1.6. En su 38º período de sesiones, en febrero de 1982, la Comisión de Derechos Humanos examinó la información reunida sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (E/CN.4/1501) y pidió al Presidente de la Comisión que, tras celebrar consultas con la Mesa, nombrara un Relator Especial para preparar un estudio a fondo sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, que debería presentarse a la Comisión en su 39º período de sesiones (resolución 1982/31)••

1.7» En su trigésimo séptimo período de sesiones la Asamblea General invitó al Gobierno de Guatemala y las demás partes interesadas a que cooperaran con el Relator Especial y pidió a la Comisión de Derechos Humanos que estudiara atentamente el informe de su Relator Especial y considerara, basándose en dicho informe, la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en Guatemala (resolución 37/184).

1.8. En su 39^o período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1983/37 el 8 de marzo de 1983. La Comisión expresó su decepción ante el hecho de que un Relator Especial de la Comisión no hubiera tenido la posibilidad de hacer un estudio a fondo de la situación de los derechos humanos en Guatemala y pidió una vez más que el Presidente nombrara, en el plazo más breve posible, tras celebrar consultas con la Mesa, un Relator Especial de la Comisión cuyo mandato consistiría en hacer un estudio a fondo de la situación de los derechos humanos en Guatemala, a base de toda la información que pudiera considerar pertinente, inclusive cualesquiera comentarios e informaciones que el Gobierno de Guatemala deseara someter.

1.9. Tras celebrar consultas con la Mesa, el Presidente decidió nombrar Relator Especial, de conformidad con la resolución arriba mencionada, al Vizconde Colville of Culross QC, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El nombramiento se hizo público en la 57^a sesión, celebrada el 11 de marzo de 1983-

1.10. En relación con lo anterior, el Presidente recibió las siguientes comunicaciones: una carta de Lord Colville, en la que éste manifestaba que estaba dispuesto a desempeñar la misión de Relator Especial, y una carta del Representante Permanente de Guatemala en Ginebra, cuya parte pertinente dice lo siguiente:

"Según instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, deseo informarle de que el Gobierno de Guatemala acepta con complacencia la nominación del Vizconde Colville of Culross QC como Relator Especial de la Comisión y que le dará toda la colaboración del caso y le brindará las facilidades necesarias en el cumplimiento de su misión."
(E/CN.4/1983/él, párr. 3b) .

1.11. Por el párrafo 9 de la resolución 1983/37 se le pide al Relator Especial que presente un informe provisional a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones y un informe definitivo a la Comisión en su 409 período de sesiones.

1.12. En este punto entré yo en funciones, tras haber escuchado al distinguido representante de Guatemala acoger favorablemente el párrafo de la resolución 1983/37 por la que se procedió a ese nombramiento.

1.13. Como quiera que, tras aprobada la anterior resolución, no se había llegado a nombrar un Relator Especial, consideré que, cuanto antes aprovechara yo la favorable acogida de los guatemaltecos tanto mejor sería. En consecuencia, visité Guatemala del sábado 25 de junio al martes 5 de julio de 1983. Después de esta visita se produjo el cambio de gobierno, el día 8 de agosto. En el informe provisional (A/38/485) sólo se pudieron incluir unas observaciones muy preliminares sobre las consecuencias de este cambio. Siempre había sido evidente que un informe basado en datos recogidos en el verano de 1983 no tendría vigencia a efectos de la labor de la Comisión. Además, había que prestar la debida atención a las actividades del nuevo Gobierno. En consecuencia, hice una nueva visita a Guatemala del jueves 24 de noviembre al martes 29 de noviembre de 1983. Después fui a

~~Nueva York~~, donde presenté el informe-"provisional exponiendo-brevemente algunos de los acontecimientos importantes ocurridos. Escuché parte del debate que siguió y estudié los textos de los ~~tierras~~ discursos pertinentes. Ulteriormente la Asamblea General aprobó la resolución 1983/IOO cuyo texto se reproduce en el anexa I.

1.14. En ambas visitas quedó efectivamente comprobado que la favorable acogida del-Gobierno guatemalteco era sincera. Se me abrieron todas las puertas, encontré una disposición a tratar abiertamente todos los aspectos de una situación sin duda terrible y se complacieron ~~ffiiia~~ deseos de viajar libremente por las zonas de conflicto con el mínimo de presencia militar y de visitar lugares escogidos exclusivamente por mí: 'Como resultado de ello, tuve acceso a todas las dependencias gubernamentales y conté con la plena cooperación de las fuerzas armadas» Visité también, por supuesto algunos otros lugares donde el Gobierno tenía en marcha proyectos que deseaba que yo viera. Así» a pesar de un apretado calendario, fue posible en ambas visitas llegar a ciertas zonas y aldeas en extremo inaccesibles para explorar la situación sobre el terreno. Los planos que figuran en los anexos muestran en qué medida pude visitar ~~li^^res~~ remotos. Estoy convencido de que ésta es la mejor manera de llegar a formular una evaluación»

1.15. Los refugiados que se encuentran en el Estado mexicano de Chiapas -exactamente al otro lado de la frontera septentrional de Guatemala- han sido objeto de atención en muchas partes del mundo. Estoy profundamente agradecido a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el organismo oficial mexicano encargado de-prestar¹ asistencia a los refugiados. No es fácil llegar a los campamentos, ni tampoco salir de ellos. Quisiera expresar a los interesados mi sincera gratitud por su ayuda.

1.16. He discutido diversos aspectos de los problemas actuales de Guatemala y de sus orígenes con mucha3 personas de varios países<, Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) merecen una mención aparte por su labor de coordinación en relación con el gran número de personas que deseaban hacer declaraciones personales, de gran valor para mí, y se tomaron grandes molestias para prestar ayuda. Pero he valorado, sin distinción alguna, todos los consejos y opiniones que recibí. Tuve en cuenta, en particular, las observaciones formuladas por las distinguidas delegaciones en la Tercera Comisión y en la Asamblea General, así como algunas discusiones oficiosas sobre el informe provisional que sostuve c^Pnumerosas personas en Nueva York a principios de diciembre.

1.17- Antes de mi primera visita a Guatemala no dispuse del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basado en una visita de ocho días realizada en septiembre de 1982. Posteriormente tuve ocasión de leer dicho informe, así como las observaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala al respecto y advertí que la Comisión realizó un examen técnico exhaustivo de la situación tal como entonces se le presentaba, hizo referencia a un análisis anterior de la Constitución del 15 de septiembre de 1955 y procedió luego a examinar con algún detalle el Estatuto Fundamental de Gobierno -Decreto Ley 24-82 y decretos subsiguientes, especialmente los referentes al estado de sitio y a la creación de los Tribunales de Fuero Especial.

1,18. Como se indica más adelante, en Guatemala ha habido diversas constituciones anteriores, la última de las cuales data de 1955; he resumido también la legislación pertinente promulgada por el gobierno encabezado por el Presidente Ríos Montt. No obstante, para los fines de mis dos informes he adoptado el criterio de atender primordialmente a la realidad de la situación sobre el terreno. Es innegable que una comparación entre los decretos constitucionales básicos y las pautas internacionalmente aceptadas reviste gran interés e importancia. No obstante, en este momento me parece de mayor interés para la comunidad internacional conocer la forma en que se aplican las políticas proclamadas. El levantamiento del estado de sitio el 23 de marzo de 1983 ha creado una situación jurídica totalmente diferente de la que aparecía ante los ojos de la CIDH. Tenemos también ahora el cambio de gobierno, unido a ciertas reformas inmediatas y a otras declaraciones políticas que han seguido a este acontecimiento. Por ello, el enfoque seguido en el presente informe consiste en identificar los antecedentes históricos y políticos que sirven de trasfondo a las nuevas políticas, intentar medir los progresos que se están haciendo y recordar a los lectores que reformas de la magnitud de las que ahora se anuncian no pueden, como se ha dicho en todos los sectores, realizarse por completo de la noche a la mañana.

19. Una visita de esta naturaleza resultaría muy poco fructífera sin preparación previa, sin arreglos eficaces y sin tomar siquiera notas. A los equipos que me acompañaron yo les presenté una pesada carga. Deseo encomiar ante las autoridades de las Naciones Unidas su espíritu de iniciativa, su gentileza, su resistencia y su competencia.

2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

2.1. Guatemala ha ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación. Guatemala ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Ratificó también, el 25 de mayo de 1979, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con una reserva al artículo 4. En la esfera sindical, Guatemala ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, de 1948 (NQ 87), y el Convenio de la misma organización relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (Nú 98).

2.2. Asimismo, en virtud del Decreto Ley 34-85» de fecha 29 de marzo de 1983» Guatemala aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951» y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967.

2.3. Par razones técnicas, Guatemala no ha ratificado ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos. No obstante, no se han expresado objeciones a la tesis de que las pautas establecidas por los pactos constituyen un fundamento adecuado para el presente informe. Esta puede considerarse una posición constructiva en la medida en que los pactos no sólo han de servir como fundamento para la presentación de denuncias, sino, lo que es más positivo, para permitir a la comunidad internacional que ofrezca orientaciones a un gobierno dispuesto a aceptarlas.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

3.1. Guatemala es básicamente una sociedad rural. Más de las tres cuartas partes de su población total, que alcanza a 7,8 millones de habitantes, vive en pequeñas comunidades esparcidas en las montañas y los valles. Más del 50% son poblaciones mayas autóctonas, que hablan 23 idiomas distintos y poseen una cultura propia rica y variada,

3.2. Aunque la mayor parte de los guatemaltecos dependen de la agricultura para su subsistencia, la mayoría vive en las regiones montañosas, donde las unidades de explotación agrícola son muy pequeñas y donde, de todos modos, parte de la tierra tampoco es adecuada. Las zonas de tierras bajas más fértiles de las llanuras costeras y otras zonas escasamente pobladas y a menudo pertenecen a propietarios de unidades muy extensas, conocidas como latifundios.

3.3. Las zonas de alta densidad de población están en las zonas montañosas occidental y central. Las zonas de baja densidad se hallan en las tierras bajas situadas en las regiones cesterías del Pacífico y del Atlántico, y en las llanuras de El Petén, en el norte. Estas características demográficas han permanecido invariables a lo largo de la historia de Guatemala. Los distintos gobiernos han tenido conciencia de este desequilibrio entre la distribución de la población y de los recursos. Los intentos de los gobiernos de llevar a cabo programas de reforma agraria y cambios sociales han conocido éxitos y fracasos.

3.4. Hay un período de reforma, que va desde 1944 a 1954 al que se alude constantemente como el período más esclarecido en la historia de Guatemala. En primer lugar, en 1944 el Presidente Jorge Ubico fue derrocado y sucedido por el Presidente Juan José Arévalo Permejo. Durante su gobierno, se introdujeron ciertas reformas básicas. En 1945 se aprobó una nueva Constitución, de carácter liberal, que incluía ambiciosas reformas políticas, económicas y laborales.

3.5. En 1947 se promulgó un detallado Código de Trabajo (que, con modificaciones, aún sigue en vigor) por el que se otorgó a los trabajadores el derecho a organizarse, negociar colectivamente, realizar huelgas y recibir una indemnización en caso de despido sin justa causa. Se favoreció la libertad de palabra y de prensa, y se permitió la organización y el funcionamiento de los partidos políticos. El Presidente Arévalo encontró considerable oposición para llevar a cabo estas reformas. No obstante, pudo cumplir íntegramente su mandato de seis años. Los candidatos más probables para sucederlo eran Francisco Arana y Jacobo Arbenz Guzmán. Arana fue asesinado y Arbenz Guzmán se convirtió en el candidato oficial. Resultó elegido, con el apoyo de la izquierda, tras derrotar al General Miguel Ydígoras Fuentes, y asumió el cargo en marzo de 1951*

3.6. En 1951 durante el Gobierno de Arbenz Guzmán, se legalizó el Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT), comunista. Su fuerza numérica en el Congreso era limitada, ya que sólo tenía cuatro escaños sobre 56. No obstante, los dirigentes del PGT desempeñaron un papel activo en la reforma agraria y en la formación de sindicatos y ligas campesinas. En junio de 1952 fue promulgada la Ley de Reforma Agraria, en virtud de la cual se habrían de expropiar los grandes latifundios no cultivados y se distribuirían en parcelas más pequeñas, para su explotación por los sectores de la población carentes de tierras. La reforma agraria tenía un cariz moderado. Sólo resultarían afectadas las partes no cultivadas de las explotaciones que superaran las 900 hectáreas. La expropiación beneficiaba a 100.000 familias campesinas, a quienes se otorgaron 607.000 hectáreas de tierras cultivables. En febrero

de 1953 se inició un movimiento dirigido a expropiar 91.065,25 hectáreas de las 121.408,33 hectáreas, de propiedad de la empresa estadounidense United Fruit Company, que las explotaba; se estipulaba que la indemnización se pagaría de conformidad con el valor fiscal declarada. Surgieron protestas con respecto a la constitucionalidad de la ley cuando un particular afectado por esta medida acudió a los tribunales para interponer un recurso contra la expropiación. La Corte Suprema, en una decisión no unánime, suspendió la aplicación de la Ley Agraria hasta que pudiera ser objeto de un estudio más cabal. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron removidos por razones de incompetencia e inmediatamente sustituidos. Algunos sectores percibieron una amenaza directa a los poderosos intereses de las empresas. Además, los trabajadores y los campesinos se apoderaron ilegalmente de bienes inmuebles, lo que dio lugar a conflictos abiertos entre propietarios y trabajadores, que a menudo resultaron de difícil control. El 27 de junio de 1954 el Presidente Arbenz Guzmán fue obligado a renunciar. El Coronel Carlos Enrique Díaz de León, jefe de las fuerzas armadas, asumió el cargo y permaneció en el poder hasta el 3 de julio de 1954.

3.7 En el anexo II se da un resumen de los acontecimientos ocurridos entre 1954 y principios de 1982. En el período que se narra estalló, en 1960, una primera rebelión, que se transformó después en una insurrección en gran escala acompañada por matanzas de gran número de combatientes y de civiles. Debería tomarse nota también de que, en realidad, desde 1953 siempre ha habido un gobierno militar, en el país. La situación presente sólo se puede comprender teniendo en cuenta ese trasfondo. Reanudaré la narración detallada de los acontecimientos con la exposición de las circunstancias que llevaron al golpe de 1982. Parece lógico empezar, evaluando la situación de los derechos humanos en Guatemala bajo el Gobierno que entonces asumió el poder; dicho Gobierno aceptó en efecto el nombramiento de un Relator Especial y durante la visita que hice en el verano pude entrevistarme con ministros y personas designadas al efecto para que explicaran acontecimientos y políticas que conocían de primera mano.

3»8. En 1981 el Gobierno convocó a elecciones. Estas se celebraron el 7 de marzo de 1982. El candidato oficial fue el Ministro de Defensa, General Aníbal Guevara. Los otros candidatos fueron Mario Sandoval Alarcón (MLN) y Alejandro Maldonado Aguirre (DCG). Una vez más, la decisión final fue adoptada por el Congreso que, reuniéndose el 13 de marzo de 1982, confirmó al General Guevara como Presidente por 39 votos contra 13. Sin embargo, 14 de los 66 miembros del Congreso no participaron.

3.9» El 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales subalternos del ejército dieron un golpe de Estado. Los oficiales declararon que las elecciones habían sido fraudulentas y denunciaron el "régimen de terror impuesto por una minoría corrompida". El grupo de oficiales pidió al General Ríos Montt que asumiera el poder y que estableciera las bases para un auténtico régimen democrático.

3»10. En su primera declaración, el General Ríos Montt recordó que hacía ocho años se le había impedido que asumiera la presidencia mediante el fraude. También sostuvo que las elecciones presidenciales de 1978 y de 1982 habían sido fraudulentas.

3-11. El 30 de marzo se designó un nuevo gabinete o junta, que constaba de cinco oficiales militares y seis civiles. El General Ríos Montt encabezaba (dicho grupo) y asumió, además, el cargo de Ministro de Defensa.

3.12. El 27 de abril la Junta Militar gobernante promulga el Decreto Ley 24-82; que entró en vigor el día siguiente. Dicho documento se titula Estatuto Fundamental de Gobierno y consta de 120 artículos repartidos en 10 libros. Según el artículo 2, el Estado se regirá "temporalmente" por las disposiciones del Estatuto. Al Estatuto se le atribuyó categoría de "ley superior" y, en consecuencia, "ninguna ley podrá contravenir sus disposiciones". En el artículo 3 se dispone que "el poder público será ejercido por una Junta Militar de Gobierno, compuesta de un presidente y dos vocales". La Junta ejercerá las funciones ejecutiva y legislativa (artículo 4)»

3.13. La estructura del poder se modificó el 9 de junio, día en que el General Ríos Montt, disolvió la Junta y asumió el poder supremo respecto de todos los asuntos civiles y militares»

3.14. El artículo 6 del Estatuto garantiza la independencia del poder judicial; el respeto a los derechos humanos se considera como uno de los principios del orden interno y de las relaciones internacionales de Guatemala,

3.15. Posteriormente se dictaron los siguientes decretos leyes:

1. Decreto Ley 33-82, de 24 de mayo de 1982, y Decreto Ley 34-82, de 27 de mayo de 1982, por los que se concedía amnistía "por los delitos políticos y delitos comunes conexos". El Decreto Ley estuvo vigente durante un período de 30 días (junio).
2. Decreto Ley 46-82, de 10 de julio de 1982, por el que se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. Estos Tribunales quedaron facultados para dictar la pena de muerte por actos de terrorismo, según se definían en el artículo 4 del Decreto Ley. En el artículo 7 se disponía que los miembros de dichos tribunales serían nombrados por el Presidente de la República. El Decreto Ley estableció un procedimiento sumario y redujo las garantías al suprimir todo recurso de apelación contra las resoluciones de los Tribunales de Fuero Especial (artículo 33)»
3. Decreto Ley 65-82, de 17 de agosto de 1982, por el que se estableció el Consejo de Estado, con funciones de asesoría.
4. Decreto Ley 111-82, de 14 de diciembre de 1982, por el que se estableció un recurso de apelación para la pena de muerte contemplada en el artículo 4 del Decreto Ley 46-82, del 10 de julio de 1982, como resultado de las recomendaciones de la CIDH, que había enviado una misión a Guatemala en septiembre de 1982.

3.16. Mediante una carta de fecha 28 de marzo de 1983 el Representante Permanente de la Misión de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra proporcionó la siguiente información: el 23 de marzo de 1983 se había levantado el "estado de sitio" en Guatemala; además, se habían dictado tres nuevas leyes "de suma importancia para la situación política nacional", a saber:

Decreto Ley 30-83, Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, de 23 de marzo de 1983. Mediante dicha ley se creó un Tribunal Supremo Electoral, con carácter permanente, autónomo en sus funciones y con jurisdicción en todo el país, y se determinaron la organización, funcionamiento y atribuciones de dicho Tribunal.

Decreto Ley 51-83, Ley del Registro de Ciudadanos, de 23 de marzo de 1983. Estableció el Registro de Ciudadanos como una dependencia técnica del Tribunal Supremo Electoral.

3.17. El 8 de agosto de 1983 el Consejo de las Fuerzas Armadas destituyó al Presidente Ríos Montt y nombró al General Osear Humberto Mejía Víctores Jefe de Estado y Ministro de la Defensa Nacional, cargo este último que había ocupado con anterioridad. En la Proclama se reafirmaba, entre otras cosas, la decisión de erradicar la corrupción en todos los niveles; la voluntad de continuar el proceso de retorno a la constitucionalidad democrática con el concurso de todos los sectores de la comunidad; y la promesa de que se adoptarían nuevas medidas de reforma y de que proseguiría la lucha contra la subversión "marxista-leninista".

3.18. Desde marzo de 1982 se han proclamado varias amnistías; en noviembre se reafirmó que la que estaba en vigor seguiría vigente hasta el 17 de marzo de 1984 ¹⁷. A esas amnistías se ha acogido un número muy considerable de personas, entre ellas guerrilleros en actividad y campesinos que les habían seguido a las montañas. El Gobierno considera, que una amnistía es un método muy eficaz para luchar contra los guerrilleros.

¹/ Véase el Decreto Ley 1-84, de 16 de enero de 1984=

4. EL CONFLICTO ACTUAL

4.1. Los movimientos revolucionarios se desarrollaron contra un trasfondo de antecedentes históricos análogos y de las injusticias y desilusiones experimentadas recientemente, desde 1954*. Hay partidos de larga data, como el Partido Socialista, Democrática, que propugnan reformas por medios constitucionales, entre otros motivos, como se observó en el Congreso que el Partido celebró en febrero de 1973 por el hecho no desdeñable de que 20 años de conflictos armados no han producido resultados especialmente felices.

4.2* Otros grupos han recurrido a las armas porque, según dicen, desesperan de hallar otros métodos de conseguir reformas. Los principales grupos revolucionarios se fusionaron en enero de 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); en la actualidad, prosiguen las conversaciones tendientes a incorporar a la Unidad algunas facciones restantes del PGi, que es el partido comunista tradicional. Otra organización, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP-IXIM), se ha negado a participar en la URNG y desde julio de 1982 actúa en forma independiente. Los dirigentes de la URNG me dijeron, en resumen, que el objetivo de su lucha es lograr el respeto del derecho a la vida y los derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales; la transformación de la economía, con inclusión de la reforma agraria; garantías de igualdad entre los indígenas y ladinos (mestizos o indígenas que han abandonado su estilo de vida tradicional) y la población de origen europeo, junto con todos los sectores democráticos de la sociedad, incluidos todos los elementos cristianos.

4.3* Esos son los guerrilleros. Según todas las fuentes, el movimiento es casi por completo local y la influencia o participación extranjera muy reducida. Entre sus jefes se cuentan personas instruidas de origen europeo; algunos oficiales parecen haberse entrenado en el extranjero y parte de sus armas proceden del mercado internacional. Sin embargo, en sus propias publicaciones afirman que capturan armas y municiones del ejército de Guatemala (la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) que opera en el sur y el oeste de Guatemala publicó en septiembre de 1983 un documento en el que, entre otras cosas, se daban cuentas de las armas y las municiones capturadas en los 12 meses precedentes); las fuerzas activas consisten principalmente en indígenas y ladinos. Todo esto no sólo lo afirman ellos, por ejemplo, en las publicaciones del Ejército Guerrillero Popular (EGP), sino que concuerda enteramente con cuanto dicen los refugiados internos y los antiguos guerrilleros que se han acogido a la amnistía y con los cuales hablé en mis dos visitas.

4.4» Estas fuerzas han estado operando principalmente en las zonas rurales, si bien el 2 de junio de 1983 se encontró en la Ciudad de Guatemala un escondite subterráneo del PGT que no fue el primero, y después se han descubierto otros. Tengo además indicios evidentes de que en cierta medida han estado realizando operaciones desde el otro lado de la frontera con México, aunque, a mi juicio, no desde los propios campamentos de refugiados. Esto es totalmente contrario a la política del Gobierno mexicano, que ha establecido un control estricto de la venta de armamentos y hace todo lo posible para impedir que su territorio se utilice como santuario. Sin embargo, una gran parte de la frontera entre Guatemala, al norte de los departamentos de Huehuetenango y El Quiché, y el Estado mexicano de Chiapas no está marcada y se encuentra en una selva tropical remota y sin caminos, donde los esfuerzos mexicanos no pueden tener éxito por muy vigorosos que sean. Una de las varias fuentes de esta información son los detalles que me proporcionaron dos ex guerrilleros, capturados por el ejército, a quienes entrevisté en la ciudad de Huehuetenango; ambos se han acogido a la amnistía. Otra es el relato que escuché en la aldea de Agua Zarca

G*mxo III, N° 17), a unos 2 km de distancia de la frontera con México, tan cerca que los habitantes hacen sus compras en México. El 25 de mayo de 1983 la aldea fue atacada por un grupo numeroso de aproximadamente 80 hombres armados y obtuvo pormenores del combate de miembros de la patrulla de civiles que había participado en él y que habían perdido a cuatro de sus elementos, además de un oficial del ejército. Todos los datos parecen indicar que el grupo procedía del otro lado de la frontera, aunque en su mayoría eran guatemaltecos autóctonos.

4.5. Durante mi segunda visita, tanto el Jefe del Estado como el Ministro de Relaciones Exteriores indicaron que en la actualidad las actividades subversivas han quedado limitadas a unas pequeñas zonas específicas y «...» los esfuerzos de los guerrilleros consistían ahora en operaciones criminales destinadas a obtener fondos. Por el contrario, en la información que publican los guerrilleros se insiste en que los ataques armados continúan...
registros hasta el otoño UP 1*??*... fe... QUO... las esferas de influencia de los... Se ha... por ejemplo... una emboscada que ocasionó... en el departamento de Sololá en noviembre de 1983 y se difundió... noticia de que el ejército había desarrollado ese mismo mes una operación importante en la cadena montañosa de Chamá, hacia el norte de los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz; esto me fue confirmado durante mi estancia en noviembre en Lancetillo (anexo V, N° 3), en la parte meridional de esa zona. Ahora como antes, los guerrilleros recorren las zonas boscosas apartadas del norte y noroeste del país y a veces otras partes, donde dependen en gran medida de la población...
Sus actividades siguen una pauta extraordinariamente regular que tuve oportunidad de conocer... plano, que acabaron siendo refugiados internos hasta su regreso a los diversos poblados o centros de reasentamiento protegidos que se describen en los párrafos 7.3.1 a 7.3.3.

4*6* Eh ciertos... las aldeas rurales cuyos pobladores les proporcionaban cuidado y sustento. Cuando el ejército se aproximaba demasiado, o en algunos casos aun sin que mediara razón parecida, obligaban a los pobladores a acompañarlos a las montañas, donde los hombres debían cultivar la tierra para producir alimentos en tanto que las mujeres...aban la ropa de los guerrilleros y les preparaban las comidas. Se les urgía también para que participaran activamente en las operaciones ofensivas, sumándose a los ataques contra el ejército... antipersonal Claymore, que se han utilizado mucho... pobladores admitió haber fabricado estas minas,... El jefe de un grupo de 70... al día siguiente del regreso de... meses en los bosques, me dijo que se le había obligado a darle charlas de carácter político. Los guerrilleros... esos grupos, o los habían obligado a... al ejército, ocupaban el poder e introducían... el contenido ideológico de sus discursos parecidos... violencia y terror: los guerrilleros... asesinaran uno tras otro a los líderes de la comunidad*. Ya en... sometidos a los indígenas con amenazas de darles muerte si trataban... no pocas veces cumplieron la amenaza. Los guerrilleros también decían a los pobladores que el ejército los mataría si... de estos grupos habían estado en las montañas por lo menos desde principios de 1982, seguramente estaban muy

al tanto de la actitud y la actividad. Los habitantes de la zona, que lo llamaban "gner" o "ere", les llamaban "3" o "4" a los que abrigan. Por eso a las personas que abrigan se les llama "3" y "4". Una "3" o "4" es una persona que ha sido capturada por los guerrilleros.

4.7. Esta pauta de actividades, con variaciones insignificantes, figuraba en los relatos de muchos grupos diferentes, a menudo recién llegados, en una amplia extensión geográfica. La pauta de actividades que se describe en este informe es el tiempo, el lugar y la forma de las actividades.

4.8. Ante el éxito conseguido por los guerrilleros, en la medida señalada, el ejército parí se ha adoptado tácticas despiadadas. Por lo menos antes de que empezara a ponerse efectivamente en práctica la nueva política en virtud de la cual

Y sotad loy p... imposible diferenciarlos. Considero esclarecedor recordar que los habitantes de Chocatalán (anexo III, N° 22), perteneciente al conocido municipio de San Martín Jilotepeque, en la parte norte de Chimaltenango, me confesaron que en un determinado momento toda la aldea se pasó al lado de la subversión; y no se trataba de enfrentamientos insignificantes sino más bien de una guerra civil en gran escala. Los guerrilleros utilizaban, al igual que ahora, todo tipo de rifles y armas de fuego, así como las minas Claymore ya mencionadas. Estas minas se colocan escondidas en un árbol, roca o muro a la altura del hombro de una persona, y disparan metralla en todas direcciones cuando un combatiente oculto las hace estallar, al paso de una patrulla. Entre otros dispositivos se cuenta el conocido pozo profundo cavado en UP... que se... disimula. Todo ello es cosa corriente, y en los hospitales de Playa Grande (anexo III, MD 6) y de la Ciudad de Guatemala (anexo III, N° 1) he visto a víctimas de todas estas armas y dispositivos. Cuando me dirigía a Nebaj, en junio una patrulla militar cayó... dos heridos,

wno tie- «ellos...»... el ejército había... resultado...

4.9. La... los guerrilleros... parece... había quebrantado el... seguido anunciando

refugiados... que... a veces las guerrillas... hecho... puesto... dicha persona se... H9 123 a... grupo buacubí... recibidos...

de la que quedaba. Cuando regresé a esa población tres días después, ya se había localizado a sus componentes y se les había trasladado a Cobán. El ejército o las patrullas de civiles encontraron o capturaron a otros grupos. Todos dijeron que se habían sentido aterrorizados por lo que pudiera pasarles y que les había sorprendido la acogida que se les había dado.

4.10. Lo anterior conduce al otro aspecto de la cuestión: la razón por la cual guerrilleros pudieron utilizar con tanto éxito el temor que provocaba el ejército entre la población. Un oficial superior me dijo en Huehuetenango (anexo IU). No que hasta 1982 el ejército no tenía una idea precisa de la estrategia que usaban los guerrilleros. Cuando se comprendió esa estrategia, es decir, cuando se comprendió que el objetivo de los guerrilleros era lograr el control de la población el ejército modificó sus métodos. Antes de 1982 no existía el concepto de dar ayuda a la población. Es preciso señalar que los elementos de prueba indican que aun después del 23 de marzo de 1982, no hubo una modificación de inmediato sus métodos.

4.11. No me propongo referirme a los acontecimientos ocurridos antes de la llegada al poder del Presidente Ríos Montt, salvo en la medida en que explican la situación de los refugiados en México (véanse los párrafos 4.4 y 7.2.1 a 7.2.7). Sin embargo, posteriormente persistieron las acusaciones de matanzas cometidas por el ejército. Esforzándome hasta el límite de mis posibilidades, sometí a un examen crítico el relato de un testigo presencial de una matanza ocurrida en Chichupak, Baja Verapaz. Era imposible que mi informador supiera que los pequeños pormenores y las pruebas circunstanciales que me proporcionaba venían a corroborar datos procedentes de otras fuentes. Asimismo, después de haberme reunido con el P. Ricardo Falla, no puedo poner en duda la veracidad de su relato de la matanza ocurrida en San Francisco, Nentón, departamento de Huehuetenango, porque, también en este caso, contenía muchas cosas y detalles sin importancia que parece increíble que se pudieran inventar.

4.12. Sin embargo, ello no significa que haya que dar crédito a todos los alegatos de esta índole. Debe repetirse el comentario del propio P. Falla sobre la forma que se transmiten estos horrendos relatos:

"Otro motivo para estudiar a fondo la matanza de San Francisco es que fue la causa principal de la huida de unos 9.000 refugiados del norte de Huehuetenango a México (en julio y agosto de 1982). Siguiendo la propagación de noticia desde la aldea misma a las aldeas vecinas... y posteriormente hasta los campos de refugiados y los principales diarios, podemos comprobar los cambios que experimenta la noticia conforme se transmite de boca en boca. Pero no obstante las variantes, la verdad básica se mantiene. Aunque algunos testimonios sean de segunda o tercera mano, no hay que descartarlos sólo porque algunos de los datos están equivocados o las cifras varían."

Estoy de acuerdo con estas observaciones, pero creo que la cuestión debe examinarse más a fondo. Algunas historias son deliberadamente selectivas, por motivos sobre los que no quiero especular. Una supuesta matanza de civiles de la que me habló un testigo presencial se reveló, tras nuevas investigaciones, como un incidente que los habitantes de una zona notoriamente subversiva se vieron atrapados en un fuego cruzado, y en el que las víctimas, tanto civiles como militares, fueron trasladadas a un hospital en helicópteros militares. Asimismo, se ha dado amplia difusión al horrible siniestro de civiles cometido por el ejército el 22 de diciembre de 1982 en una población denominada Parraxat, en el oeste de El Quiché. Ahora

en septiembre, este pcbiado habla reciftiJo la ctslt-a le ui*a ;«iisi*5a de l;c CR>H* Se dice que 350 personas fueron asesinadas on oxciemore, ¿ero cura ahora en mí poder un documento preparado en junio de 1^8} por un oIvil can experiencia que, iras conversaciones exhaustivas con los habitantes del lugar, llago*c? la conclusion de *que el relato era totalmente falso y de que ningún periodista de ruera lo tebfa verificado aates de que ae publicara*. \kt/» sin ^saharfú, otras acuâ&ciones de que probablemente en oineo ocasiones a principiar úe 19Ô2 f^iü-ron asesiswias algnas pferionas de esta misma cicatea, pero tampoco en e^t« ca^o Darece que nadie haya inves-
tigado ai asunto, así puesu este inforce pisotea también ayunos problflaasn Ksoa **incidentes ocur***rier«n antes do Id vx&ita de la Ccii«jsSéii 3 ñt-erâie^Sesna de derechos Humanos, pero **evidentemente los habitantes de la aldea no se los contaron a los miembros de** **rido en 1980.**

4.13. En consecuencia, **tra todos los relatos** que circulan « Otro ^JecâDio 40e vtitiie ^1 ca^o *a ^A U^ ¿iveraos infer-
wes en que ae habla de mñsa ? lc& ^ue ÎCS SÛIci adO& ai^ravoSa^of* ÔCR sua bayonetas, peros como pude apreciar peraon&lmentâ, las soldados no llevan bayonetas y el tipo .
de as*@as ^ue utilizan no parnite taRipoeo le- erjoo^ctañ d« b&yanata&. A pesar de todo lo dicho i me veri oDXagai© E» llegar i 1^ ¿onci'ísic'rt de vjufej, auñ dur&nie la presidencia del Genera? Ríos Mont^, H© ^curebtercr atroriaadetf que violan tada noeíân de los derecho» huiaanos funaaseritales fe Ahor^ »t, p^ia^fcea ia «susstien de si esas prácticas conti^úan o na t>sjâ el Gobierne del Genm^l tte^ía. En las fuerzas armadas de todos los países h&f perao^a? que coms^e* «¿oíacSonsa d© -istayor o menor gravedad* L© mismo ocurre sn e\ caso de ^tas unlti^ctes rso reg>ls.peñ del tipo de las patrullas civiles de Guateoi&la. lo prirvOibal en ño que se refiere a los derechos humados ©3 «X grado de disüipilda que ae ejerce n^ra iiap-ec'is- tal **abuso de poder,** para investigar las acusaciones tí& casos de esa ^doJte y pa^a caatigar a los que resulten culpables Volveré a tratar e>t<> tcm§ erj el párrafo 6*4*

4*14» Un objetivo secundario de mi visita a la fr-ckilera con ^xioo y a las **zonas adyacentes** consistía en coas pro b&i> ai ualiXa ^a**^ v^**^ ^^ ¿^ u^ta f,«irtioa d« ^t4.erra quemada^ o de an ^cordén sanitario^t en &añ regleta. Los íSuéos atg^os de fuego se podían ver en unas cuanta» sonas pequeñas del norte *ám EX ^ílehé éonde los métodos de **corte y quema^n utilizados para el cultivo de tierras -tácniea que por lo dessás no ae limita & esa pa**te del al ti plano « habían provcoado ooaio resultado algunas extensiones de terrenas Quemadas» Vi también un& aldea abandonada pero intacte @n la ^otía de íacoán Can@3co III, M» 7); por le demás» la nona parece ©star pe^o **poblada** de todos isodos y eeta^* cubierta da espejea bosques* Pür lo tanto, na he hallado prueba alguna que sirva de apoyo a esa afirmación* En ©1 noroeste de **Huehuetenango,** la aid@& de agua Zapea («m«to III, Mû 17>, gltuads a *xn@ñ 2 km Oe Xa **frontera,** constituye un Indicio de quís por lo meaos ers a^a ¿ona @s manti^rí© f ©^ da apoyo a la poblaolén de la í*egiçio fronteriza (véase el párrafo 4«4)**

5. IMPLANTACIÓN DE REFORMAS

5.1. Como se ha indicado ya, los disturbios ocurridos en Guatemala han sido en gran parte consecuencia del trato injusto de que viene siendo objeto desde hace mucho tiempo la población indígena. Esto de por sí ha supuesto la negación pura y simple de los derechos económicos, sociales y culturales. Las reformas que se están comenzando a implantar o que se están estudiando, aunque concebidas en beneficio de todos los ciudadanos guatemaltecos, se refieren de una manera especial a los indígenas.

5.2. Estos pertenecen a la misma raza que creó la gran civilización maya. Conoció a muchos de ellos, y todos me impresionaron por su carácter cordial, trabajador y sufrido. Los que ocupaban una posición de responsabilidad, como los miembros indígenas del antiguo Consejo de Estado, los alcaldes de los municipios o el joven honorable (técnicamente un ladino) que me hizo visitar una explotación agrícola experimental estatal tuvieron ocasión de demostrar sus aptitudes. Conviene recordar ciertos aspectos de su historia. Un viejo estadista guatemalteco me refirió que, en la primera mitad del siglo XVI, casi inmediatamente después de que los conquistadores hubieran ocupado el país, los Papas Clemente VII y Pablo III declararon que se debía considerar a los habitantes seres humanos en todo respecto. Sin embargo, durante casi 450 años ha prevalecido una actitud que en su forma extrema se caracteriza por el dicho de que "matar a un indio no es lo mismo que matar a un hombre". La palabra "indio" no se vuelve a utilizar en este informe, ya que puede tener una connotación despectiva en español. Muchos indígenas han emigrado a la periferia de las ciudades más grandes, pero el resto tiene pequeñas parcelas de las tierras menos fértiles, o sencillamente carecen de tierras. Apenas logran subsistir. El maíz, producto esencial en la dieta, puede cultivarse en laderas muy inclinadas; se puede plantar después de talar y quemar el bosque, pero esto produce una grave erosión del suelo y el cultivo en terrazas no forma parte de la cultura indígena (aunque se está introduciendo la técnica: véase más adelante).

5.3- La pobreza resultante ha impulsado tradicionalmente a esta parte de la población a emigrar una o dos veces al año para trabajar en las plantaciones costeras o en otras grandes plantaciones a fin de ganar algún dinero para subsistir. Como estas plantaciones se especializan en cultivos como café, azúcar y algodón, que requieren gran densidad de mano de obra por temporadas, los trabajadores migratorios resultan esenciales. Esta situación se refleja en el Reglamento de Jornaleros de 1877, que contenía normas generales sobre contratos de trabajo; el Reglamento fue revisado en 1894 y se mantuvo en vigor, con modificaciones menores, hasta 1934. Según esa disposición legal los trabajadores agrícolas se dividían en tres grandes grupos: "colonos", "jornaleros habilitados" y "jornaleros no habilitados". La distinción se basaba en la duración del contrato y en que el trabajador viviera o no en la plantación. La ley exigía que todos los trabajadores llevaran "libretos" en que el patrono anotaba los débitos y los créditos. El hecho de que la mayoría de los trabajadores eran analfabetos, daba lugar a que se les hiciese víctimas de injusticias y de explotación. A algunos se les mantenía en deuda perpetua y en consecuencia estaban obligados por ley a trabajar sin interrupción en la plantación. Posteriormente, en 1934 se promulgó la Ley de Vagancia, en que se disponía que cualquiera que no cultivara una parcela de determinadas dimensiones tenía que trabajar un número mínimo de días para otra

persona. Los trabajadores tenían QW i A⁵ vas-nleisprv consigo una target.2 <? qsr* los patronos ¬abûR ti ntfsiero dr-íví trei;^,%c"os. 1? 3. iwúivi^ua se oa^ylife *X número i&&tl>e le dfster pnrôfa &&r c^t.g&ik;: c&no vago. T^KJO esto ae transform! radicalmerst? con la Consit ución de 194; se incorporaron admirables preceptos sobre luís d^^ehos de K*^ tr^-ajiu-a?(H_k >ueK.ioc< saIsrica ^ini^oa, v && crearon los tribunal es del trabajo. P» el ûicigu de Tra^rk* de T-V7 a& f"ií,U'on catas cuestiones con mucho mayor detalle.

clones en eurx&K&y^ cerris formavivn de sindicatos en el campo (y en otras partes). Ha pagan los salarios mínimos; y se han criticado duras en los trabajadores migratorios ea lasi r&ilaciones. Una visita al ingenio azucarero de Pentaleón, en Escuintla, (anexo III, N° 2), he demostró con toda claridad que esta situación se puede remediar. Paulatinamente se viviendas

rabies j y >> ^AXA^i^t Is sera^ia)u^ayr^)^y qu* lct* v&ari^s s^ia t^asjain6 t^n d ingenio. Se proporcionan, satiamo, servicios de atención de la salud, deportivos y sociales y, en comparación con las condiciones de una casa en el altiplano, el ulo^ za de trabajo estacional dista de ser malo. Es verdad que las p&ir^t& <as,lib&as por la progresista familia que administra esta explotación no se han generalizado, l... na el efecto económico de atraer a los trabajadores migratorios en forma positiva. Esta situación parece muy pertinente an relación con el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, fío^ia)^* e Culi^rales.

>>5» Ali-probl«ai*-ant«i7i<ir--sië"Viikiuia la distribuci^» injusta d\$ la tierra. 21 60%. de la tl«rra de propiedad-"privada pertenece al 2% de la poblaci&i; en lab' jr&iid©^ haciendas» patrfe.de la tierra se mantiene aún cultivar- Aparte de la -eforma agraria--intctldâ en el p&f*foda comprendido entre 1944 F I?54» «1 principio Se la dlstrl-buoión lra; -existido más en la teoría <us Sñ-la práctica» Existe W&B. mtm^W&a^"Él Mimûn^l^f^m^i&^fraM&V^e^Bnl-û^l Uúrte^ QÍM «e éicfcieidè desde el msr^ le El QuèRnif-«! sui>- cíe-El' P&éti y el-s^rfe^ d^ alta-^ftrapas "hasta la costa del l&aribe. lio^pSXo^es-e&ta. lñ Ferien ^èi%è^&& ^entx&htr&ú lb^e reowrso» ele petróleo^ ifquel sino^ mab&ên^ una^ r&gièu^âm^ tierras^ fértiles. < <mt gran parte dé rppiedad leí Estado*

• 6. En P4 dretfPta de 1970 se prometió que, simultáneamente con la apertura de construcción de una nueva red de carreteras, se distribuirían tierras a la pobl^Gldn rural; pero las promesas no se cumplieron^ lo que causó una marga re e la cía Je dirigente.

• 7. Un aspecto importante del Gobierno de Ríos Montt fue el reconocimiento franco e las numerosas injusticias soportadas durante siglos por la población indígena, y or los ladinos en la medida en que también han sido afectados en forma análoga.

En la esfera política, es l O OH &il&us t^ Q&us&u&^ t&nd&i^mente^ &il^ C&il&as C&il&as C&il&as rata de instaurar. encionó estos dos aspectos como materia de políticas que se han de seguir acti- amente, y qur están estrechamente relacionadas con los planes más amplios para a reconstrucción del país y el reasentamiento de la población desplazada, de los uz of y vi más cosas < l visita de noviembre.

5.8. Los tres pilares fundamentales de la política del Gobierno de Ríos Montt fueron la supresión de la subversión, la instauración de una participación democrática en la elección del gobierno mucho mayor, probablemente, que la que había existido nunca antes y una amplia serie de medidas para reconstruir un país devastado por la violencia y comenzar a reducir simultáneamente las desigualdades de niveles de vida y de oportunidades entre los diferentes sectores de la sociedad. El nuevo Gobierno sigue aplicando activamente la misma política, aunque con ciertas variantes.

5.9. No es necesario insistir en lo deseable que es la paz como fundamento del progreso de los derechos humanos. Para que sea posible cualquier avance es preciso poner término a los desplazamientos de población, a la destrucción de escuelas, de edificios municipales y otra infraestructura y a otras penalidades. Se ha dado un primer paso en esa dirección, pero mientras continúe la violencia el futuro seguirá siendo incierto. Por ejemplo, la labor del Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) en el vasto departamento septentrional de El Petén está siendo perturbada actualmente por la actividad subversiva.

54P* Elecciones democráticas: Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.10.1. Se ha mencionado ya el Decreto Ley 30.83, por el que se creó un Tribunal Supremo Electoral. La primera medida consistió en el nombramiento por el Presidente de la Corte Suprema, Sr. Ricardo Sagastume Vidaurre, de una Comisión de Postulación de siete miembros integrada por distinguidas personalidades universitarias independientes. El 19 de mayo de 1983, la Comisión presentó a los miembros de la Corte Suprema las candidaturas de 20 juristas, de entre los cuales la Corte debía elegir a cinco miembros. El 23 de mayo fueron elegidos los siguientes miembros, todos magistrados:

Arturo Herburger Asturias (Presidente)

Gonzalo Menéndez de la Riva

Manuel Ruano Mejía

Ricardo René Búcaro Salaverría

Julio César Ordoñez Polanco

El Tribunal se constituyó oficialmente (a pesar de la proclamación del estado de alarma) el 30 de junio de 1983-

5*10.2. Las tres principales tareas inmediatas del Tribunal son: organizar la compilación de un nuevo registro electoral; supervisar el proceso en virtud del cual se constituyen comités habilitados para formar el núcleo de los futuros partidos políticos que participarán en las elecciones; y preparar una ley electoral completa para someterla al Jefe del Estado. El 25 de noviembre, al reunirme con el Tribunal, e inmediatamente después la situación era la siguiente:

5.10.2.1. El Gobierno anterior había en&M&ac* un sistema electrónico muy perfeccionado que daba en sí mismo ni a graves sospechas de una posible injerencia en la vida privada 2/. Se supo, no sólo que este equipo sería muy caro, sino también que su entrega era insegura, por lo que se ha anulado el pedido. En su lugar se ha puesto en práctica un sistema basado en la tarjeta de identidad ordinaria (cédula de vecindad) que poseen los ciudadanos. Previa presentación de dicha cédula toda persona queda inscrita como elector en el registro de su domicilio. Las personas que sabían leer y escribir están obligadas a inscribirse en el registro, pero esa inscripción es facultativa en el caso de los analfabetos.

5.10.2.2. Dado que ofrece la posibilidad de varios registros. Se alega, por ejemplo, que pueden presentarse las cédulas de veintidós personas fallecidas para ejercer nuevamente con otro nombre el derecho de sufragio. El hecho de que las tarjetas de identidad lleven una fotografía constituye una salvaguardia.

5.10.2.3. Otro problema grave es el que se deriva de la violencia imperante en los últimos años. Se afirma que muchas personas han perdido su tarjeta de identidad o han sido despojadas de ella por los guerrilleros. Es posible reponerlas mediante la presentación de un certificado de nacimiento. Dichos certificados se solicitan en el centro municipal, ahora bien, como ya se ha visto, los edificios municipales han constituido el objetivo de ataques subversivos y muchos de ellos han sido quemados, quedando los expedientes destruidos en el fuego. Este problema me fue expuesto gráficamente en noviembre por el alcalde de San Andrés Semetabaj, en el departamento de Sololá (anexo V, No 1), y se prometió ayuda de la administración central. En esa ciudad los edificios municipales fueron quemados hace dos años. Se trata de un problema muy general.

5.10.2.4. La inscripción en el registro se inició en la capital y en otras zonas urbanas. En un comunicado de prensa, el 10 de diciembre de 1985 se anunció que el proceso de inscripción se extendió a las zonas no urbanas se estaban creando centros de inscripción y los próximos departamentos que iban a ser atendidos eran los de los alrededores de la capital y los situados al sur de la misma. Se requerirá a la radio para transmitir y destacar la necesidad de la inscripción. La mayoría de la población, incluso en las regiones más remotas de Guatemala, dispone de una radio de transistores. En el último comunicado de prensa se afirma que, a fines de 1985, el número de inscripciones ascendía a 519.205 en el departamento de Guatemala, 52.624 en Sacatepequez, 35.631 en Jalapa, 49.244 en Zacapa y 28.760 en El Progreso.

5.10.2.5. Diversos comités han solicitado su inscripción para servir de base a la formación de partidos políticos. No está claro cuánto tiempo los que cumplen los requisitos; la autoridad gubernativa indicaba un 25 a 30 por ciento en el comunicado de prensa del Tribunal de la Corte. Una fuente independiente afirma que 34 grupos se están organizando en forma de comités.

Las solicitudes, por z...^.^ztq, proceden de grupos que se sitúan en muy diversos puntos del espectro político. Cabe señalar que se siguen haciendo proposiciones a varios partidos, incluido el P.S.,D* para nue **participen**.

5.10.2.6. El proyecto de ley electoral está listo, en la forma establecida por el Decreto 3-84-

5.10.3» El Tribunal Supremo Electoral desempeñará en su momento un último cometido. Actuará con carácter judicial para resolver cualquier litigio dimanante del proceso electoral,, En previsión de esta función limita sus actividades y publicidad a los detalles técnicos de la inscripción y los procesos electorales. No tiene la intención de alentar a los guatemaltecos a intervenir efectivamente en actividades políticas, ni siquiera a votar, dejando que lo hagan los partidos mismos•

5.10.4* El calendario para la reinstauración de la democracia, establecido en parte en el Decreto Ley 5-84, es el siguiente:

- a) Elecciones constitucionales, que se convocarán en marzo de 1984 o en una fecha anterior, para la elección de 65 diputados representantes de los correspondientes distritos electorales y 23 diputados de base nacional (el Tribunal Supremo Electoral se ocupa de este sistema mixto de cámara única)»
- b) Elección de una Asamblea Constituyente, el 12 de julio de 1984.
- c) Constitución de la Asamblea Constituyente el 31 de agosto de 1984 a más tardar (o antes si se cancela o resuelve cualquier procedimiento judicial) para redactar una nueva Ley fundamental, la ley electoral y las leyes de amparo, habeas corpus y constitucionalidad,
- d) Instauración de un nuevo Gobierno constitucional el 1º de julio de 1985 como máximo (esto no figura en el Decreto Ley 3-84).

De una manera general se indicó que esas fechas se adelantarían de ser posible (pero **no hasta** el punto de poner en peligro las posibilidades de formación de nuevos **partidos** políticos). Tal parece ser la situación que se está creando.

5.11. El Consejo de Estado

5-11.1• El Gobierno de Ríos Montt creó un Consejo de Estado. Se trataba de un órgano de libre designación, pero su composición era ampliamente representativa. Sin subestimar en modo alguno la calidad de otros miembros, una característica notable era la inclusión, por primera vez en la historia del país, de cierto número de representantes de los indígenas,, En junio pasé varias horas con el Consejo reunido en sesión, El programa "fríjoles y fusiles" (véase más adelante) contaba con el apoyo general y se convino en que la "apertura política" era lo mejor que había ocurrido en Guatemala, aunque se destacó la necesidad de fomentar la educación política en las zonas rurales» Eots apoyo a determinados aspectos de la política del Gobierno no significa que el Consejo fuera una mera organización títere» Los miembros tenían sus desacuerdos y sus críticas con respecto a otros aspectos- El cometido que tenía señalado el Consejo era elaborar las propuestas

iniciales del Tribunal Supremo Electoral. Así lo hizo y, como se ha indicado, algunas propuestas se incluyeron en el Decreto Ley 30-83. En el verano de 1983, sin embargo, los Fifenintes c'at'á-MH'á, entre los cuales los indígenas no eran los menos, empezaron a establecer contactos con sus "electores".

5.11.2. El nuevo Gobierno abolió el Consejo en agosto de 1983, aduciendo que había concluido su tarea y se había convertido en una carga financiera. El Jefe del Estado sólo pudo darles seguridades de que por ahora la población indígena participa en el proceso de gobierno por medio de las personas de la dirección del INTA (el órgano nacional encargado del reparto de tierras y la concesión de los títulos de propiedad) y un alto funcionario del Ministerio de Economía, que son indígenas o tienen esos orígenes.

5.11.3. Debo decir que, en vista del largo proceso necesario para la instauración de un gobierno democrático, lamento la desaparición del Consejo de Estado. No era un órgano electivo y sólo hubiera ejercido funciones de asesoramiento, pero parece haber servido de puente entre el pueblo y los poderes públicos.

5.12. Reformas económicas y sociales

Después de mi primera visita a Guatemala escribí lo siguiente:

5.12.1. Estaría fuera de lugar internarse demasiado en la esfera emergente económica, pero es preciso señalar que Guatemala depende en gran medida de las importaciones de muchos productos básicos, como artículos de metal de todo tipo, incluso láminas corrugadas, y de machete. La balanza de pagos y el crecimiento del producto fueron satisfactorios hasta hace poco, cuando los precios mundiales de los productos agrícolas de exportación tradicional, como el café, el algodón y el azúcar, experimentaron una baja pronunciada. La explotación de los recursos en petróleo y níquel no es fácil; los precios mundiales son bajos y el nivel de inversión a largo plazo es bajo. La riqueza es objeto de tantas controversias como en muchos otros países. Ahora bien, las empresas que produzcan utilidades a la nación afectarán al monto de los recursos de que se disponga para llevar a cabo los proyectos de reforma y progreso sociales. Resultaron alentadoras las conversaciones muy constructivas mantenidas con diversas personas, en especial los representantes de la CACIF (Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Finanzas), sobre las actitudes respecto de esos problemas. Existen indicios de que, a través de la empresa privada y la formación de cooperativas, incluso de servicios de transporte, se podría ampliar considerablemente la variedad de productos para la exportación y los ingresos de divisas. Ya se cultiva cardamomo, ajo, papa, pimiento rojo y flores. Existe buen mercado en los Estados Unidos de América para las hortalizas, sobre todo si resultara factible congelarlas. En la línea divisoria entre los departamentos de Suchitepequez (anexo III, N° 3) y Retalhuleu (anexo III, N° 4) visité una finca experimental en que se cultivaba y se elaboraba el palmito y se cultivaban otros productos nuevos o mejorados. La finca experimental pertenecía al Ministerio de Agricultura. La vida de Guatemala es famosa en todo el mundo (y existen apiñamientos a lo largo de las carreteras en el Estado mexicano y en las riberas del río Lacantún). Lo que hace falta es mejorar el sistema de carreteras y proporcionar capacitación técnica en comercialización y distribución.

Otros productos de exportación que tendrían aceptación en los mercados mundiales son* las maderas duras, como la caoba » que se desarrolla con asombrosa rapidez en el clima subecuatorial de la Planicie Transversal del Norte*; en Chiapas existe una planta** experimental (anexo III, m 10)«

5.12.2« La pertinencia de las consideraciones precedentes se relaciona con el hecho de que, según se desprende de la actitud de indígenas como los que se encuentran en los campamentos mexicanos para refugiados de Puerto Rico (anexo III, HS 4) Y Chajul (Conexo III, MO 5)» los guatemaltecos están dispuestos a abandonar su forma de vida tradicional en la economía de subsistencia de sus aldeas y formar empresas cooperativas que ofrezcan la oportunidad de añadir un cultivo comercial a la producción de alimentos básicos para la familia. Existen otros ejemplos, como en San Andrés Semetabaj y Quezaltenango y en sonsonates cercanías a la capital» Es innegable que «este tipo de evolución conduce a los niveles de vida enunciados en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»

5.12.3. Las iniciativas del propio Gobierno coinciden muy bien con tales empresas. Las consignas de las consignas -"frijoles y fósiles" o "techo" trabajo y tortillas" ("la? tres T">» no deben deslucir los logros y las aspiraciones de los ministerios y organismos interesados. Existe en realidad una política integrada, partes de la cual han sobrevivido desde mediados del decenio de 1970? tanto en teoría como en la práctica. Como dijo el entonces Ministro del Interior, "durante toda la historia de Guatemala se había hecho caso omiso de la cuestión indígena,* La subversión hizo que »& diéramos cuenta de este hecho, que nuestro Gobierno ya no puede seguir desconociendo".

5.12.4* Los dos programas se funden en un plan práctico» más amplio, de autorreconstrucción y autodefensa, con todo el apoyo logístico y técnico que puede proporcionar el Gobierno central y los de los departamentos. En los lugares en que se ha concentrado la población* y donde* se han asentado (inicialmente, por lo menos) los refugiados internos, existe una necesidad apremiante de alimentos básicos» Se dice que se distribuye entre*# parte.» &» 3a proporcionar frijoles, maíz* harina, azúcar, leche y pescado, estos dos últimos productos suministrados por el Programa Mundial de Alimentos; sin embargo* en la mayoría de los lugares, los sacos que vi contenían azúcar y frijoles» productos que constituyen la dieta básica del altiplano* El ejército entrega periódicamente estos alimentos por carreteras increíblemente malas, cuando existen» o por aire* El deseo de trabajar es instintivo entre los indígenas. El grupo de viudas de guerra con BUB hijos que conocí en Nebaj (Anexo III, No 12) insistían en que si bien eran demasiado viejas en algunos casos para aprender nuevos oficios, todas ellas podían cultivar alimentos para su familia y tejer sus ferias tradicionales» En el caso mencionado* ya disponían de parcelas de bisi-ras* agrícolas* capaces de producir para materiales de tejer* En consecuencia* el problema urgente es el de la redistribución de tierras,, como ha recalcado el CRN» La política obviante en comenzar con las tierras de propiedad del Estado, ya que* como dijo el entonces Ministro del Interior» sería preferible que fuera un gobierno elegido democráticamente el que enfrentara si por el lema mayor & redistribuir la tierra de propiedad privada. El organismo encargado de distribuir la? tierras de propiedad del Estado es el INIA (Instituto Nacional de Transformación Agraria). El INIA se creó en 1972, pero ha sido objeto de numerosas modificaciones, Tiene

facultatifs para icjudxeai tierrií* $x \wedge x \wedge si \wedge n$ oono tiro:* rihi>rvix*',4?& de aajucieaeio»;
 tres para propietarios indiviv.u\Ííu y ci " ce n*ra jrep.edaí c colectivas. KI
 Instituto ha veriiiiifj des^rruJ tanjt^ ar. ¿}ÚU pC^ic en los departamento¹⁸* de Alta y
 Baja Verapas con el objeto 4e oeneficl&r a 35-000 familias, y aein^Jmente está
 llevando a cabo un progfamj en to^a In. íranja Transversal del VÍ«orte, deede Ixoán
 (anexo III, Na 7), en Quiché Cej Norte « hasta Livinp-bton *n Isahal, parte de
 cuyo proyecto vi eu Chxsec (anexo ICC^ \> 10)^s este pr&grsma comprende la capacita-
 ción agrícola* Laa estadíaricar oe aue ^e olapone son notable y el CNIA tiene
 objetivos digíios d? toao elogio, como tsl itpJORAMTENW del nivel económico de les
 agricultores arrendatarios, la legalización de los títulos ée propiedad de la
 ti©rra, la producción db cultivoa rentat>lejí y <»l a^cyt a ía inf^estructura,. **todos**
 los cuales cont&ráfí con el apoyo *úe pr-up^sñis de capacitación. Se deben encomiar*
sin reservas estas aotivlüAdeSj aunque hn greus p%^{te} caer* fyera d^l alcance de un
 Informe sob>^⁵ loj de<«*qjuF humanos fe ^n íc qu& respecta al derecho a un nivel <Se vida
 adecuado, incluida una aiiíoeri^rfCjér aie-Limda v una continua H^Jora de las **condiciones**
de vida g lét necesidad asás apreiaiance:? como *© ate^ti^Usi 1A situaron de Chlsec, **pareci**
consistir @K una acele^seion del proceso do adjudicar û^isfítivamente los taCullo **de**
propiedad de la fierra! ftasta que ~<\$XÛ se cumpla», lab f,imill«*8 no tippen segurldaci
 para desarrollar l& pl^rc* Droctiiütírtoac le la **tierra.**

S#12,5* En relación con el párrafo 2 del artículo il del Pacta Internacional de
 Dareohoa BeotAíeos, SiJriales y CaJturóles., el <>ntof>ces Ministro %e agricultura
 señalé que ys se eataban ejeeutando dos programas: esto\$ programas difieren **díame-**
 tralmente del anterior método <k* plar*ifiCf.H^iëB, ya que los aeseop y la participa-
 ción de la poblaeíeri local consul tu ven *• í cunto >l* partida r»ara ifc elección de «n
 proyecto^ al que se le asignan k^gt> la ^iyy<ficii téC Rica : los recursos **nacionales**
 necesarios* El prlaaer pa»o consiste es dar priai'ldaü a ios pr&fe*ifoo que **satisfagan**
 las necesidadee básicas en -naterSs <*** nwh-r OÍÔÛ> â?se come It cr^aclfe **de proyectos**
 c©9i«iiltario8 pars la protíucción 0e alimentos coma hortaliaas* fruta»p **animales**
pequeños s pescado f «*e<*_f JU^* se^or^ys @l c^f*teai da r^ proiefts&y y i^ttasainas de la
dieta. En diferant©^ partes ae-l país_f «ás rr I.bOC campesJinos y* se fsm **benefi-**
 ciado de IA proyectos ae e^te tipo,. El entonces* Ministro taasbié* estaba preparando
 un proyecto de ley por el que se habríau establecido rfi^er^os método® para que los
 grandes terratententea v**tidieran tt<*irs ^oiünariam<í*rtv^s y P^Í* SU justo **valor,**
 a los campesinos sin tierra_ K* par-a qué participe*. «»í %»^ ilohos c^ropeairsos <h
 empresas agrícolas ooftjuntaa* Ki hdnia*T-o Oljo qae ^sas láeas tenía» **aceptación**
 es de esperar que se **continúe la iniciativa.**

5*12*6.» Aaf pues, por "frijoles"¹¹ se* entiende un conjunto complejo de proyectos*
 aunque ésto& se encuentran en etapas iniciales de ^jecueí^n. bicho oonjanto de
 proyectos s© vincula a los elementos "teche**1 y "trabajo" de "las tres f^n« Hasta
 que se pu*>da reanudar y loeJORar ía producción agrícola, la pobXacióV recibe ali-
 mentación gratuita a cambio *úm* *m trabajo en los diferentes proyectos• Uo
 observé oposición ninguna a «*^a i d^& » y el segando jeí> ae la zona militar de
 Huehetenango (anexo IX1, ÍÍO 16) dijo que la poblaoit^ñ nabXa reaccionado en forrsa
 muy positiva* Ea lo qú© ae refiere a vivienda, el Comité da Reconstrucción
 Macional suisinistra las postes ?squáreros y ©3 tecfvs, asf como la supervisión; el
 ejercito tâTibi^ñ ayuda La Ø*1 lí*uct^ái Pisp»a está & oaigo de la familia, la que
 debe nalíar oiaWrialee ^«rs Iss paretie&j qíe et, Guatemala **ne necesitan ser muy**
sólidas.

5.12.7, Respecto a los proyectos de trabajo, no sólo proporcionan el medio para que las personas reasentadas se ganen la vida, sino también contribuyen a aliviar el grave problema del desempleo en Guatemala: ambas soluciones son pertinentes en relación con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como explicó el Ministro de Trabajo, se han aprobado dos programas principales dentro de cinco planes complejos. Estos planes tienen por objeto dar empleo a 54.000 personas en los siguientes proyectos:

- a) construcción de caminos vecinales,
- b) riego de 40.000 hectáreas,
- c) conservación de suelos en una extensión de 67.000 hectáreas con inclusión de construcción de terrazas, preparación de tierras de pastoreo y acueductos, y
- d) reforestación de 30.000 hectáreas en 12 departamentos del altiplano.

Los proyectos de alimentos a cambio de trabajo comprenden la construcción y el mejoramiento de caminos; los organizadores del ejército y de otros organismos del Gobierno también se dedican directamente a la construcción de caminos de penetración en zonas alejadas, como la del norte de Nentón (anexo III, NQ 18), donde vi trabajos de ingeniería de gran envergadura. Este mejoramiento de la infraestructura tiene además el efecto indirecto de mejorar el nivel de vida de los habitantes de estas zonas apartadas.

5.12.8. Insisto en que tuve la impresión de que, excepto en el caso de los caminos, respecto de los cuales hay mucho que mostrar, los programas se encuentran en etapas comparativamente iniciales de su ejecución.

5.12.9» Por otro lado, el Comité de Reconstrucción Nacional, que ha venido funcionando bajo tres gobiernos anteriores al actual, puede mostrar resultados notables en cuanto a proyectos terminados. Además de su responsabilidad general por el programa "frijoles", han ejecutado pequeños proyectos en aldeas rurales, conforme a las prioridades señaladas por los mismos habitantes. En el cuadro del anexo III de^Informe preliminar jj/ se muestra, por departamentos, la labor cumplida en la co^trucción de escuelas, centros comunitarios, clínicas, abastecimiento de agua, iglesias, caminos, pistas de aterrizaje y techos mínimos; la población local aporta el trabajo y el Comité la supervisión técnica. Esto tiene importancia especial en el caso de las escuelas, muchas de las cuales son las primeras que se han construido nunca en las aldeas correspondientes. Como ejemplo de las necesidades, aun en materia de enseñanza primaria, los datos correspondientes al departamento de Huehuetenango señalan que el 90% de las escuelas estaban cerradas debido a la subversión. El censo de población de 1982 dio la cifra de 30.000 niños, en tanto que la cifra actual es de 68.000 niños. La mayoría de los maestros han regresado, pero sólo hay 152 escuelas originales a las que se han añadido otras 37 recientemente. En Nentón (anexo III, NQ 18) se han reconstruido todas las escuelas primarias destruidas. He leído quejas de que no existe libertad de educación en Guatemala, porque el programa está organizado

por el Ministerio de Educación (lo que, sin duda, no constituye una actuación única en su género). Sin embargo, en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Como existe una falta de maestros y, como escuché decir en Nebaj, a lápices, cuadernos y libros, parece correcto que el Gobierno se concentre en estas cuestiones como cuestión prioritaria.

5.12.10. Ahora es preciso poner al día esta reseña. El Gobierno subraya que el relativo al reasentamiento y ulterior progreso de la población rural se incluye con arreglo a un plan en tres etapas. Se trata del Plan de Acción para las Áreas de Conflicto (PAAC) iniciado en junio de 1982 y que sigue siendo la política oficial. Dicho Plan prevé que la superación de los múltiples efectos de la violencia requiere:

- a) Una etapa de supervivencia, en la cual se recibe a los refugiados internos después de su huida al campo; se les da ropa y comida y se les proporciona trabajo, bajo la protección de los militares;
- b) Una etapa de nueva instalación en las aldeas de origen o reagrupamientos más alejados de población, según el deseo de la gente, con medidas de seguridad.
- c) Una etapa de desarrollo, en la cual las instituciones estatales de apoyo, en particular expertos del ejército, realizan construcciones y otras actividades de apoyo técnico en la esfera de la infraestructura y la agricultura.

Es importante considerar algunas cuestiones, incluidas las denominadas "ideas modelo" (véase el párrafo 7.3), en el contexto de ese plan global.

5.12.11. Se han introducido cambios organizativos para una mejor aplicación de este plan y se ha ampliado el proceso de desarrollo para que abarque a todo el país. Desde junio de 1983 cada departamento cuenta con un oficial del ejército como gobernador efectivo. Sin embargo, el CRN ha asumido recientemente un papel esencial en el proceso de desarrollo. Este órgano, creado en 1976, responde directamente ante la Presidencia por decreto del Gobierno, de 18 de octubre de 1983 se crearon comités de coordinación interinstitucionales en los planos nacional, departamental y local. Actualmente todos los departamentos e instituciones oficiales que actúan en la zona, junto con cualesquiera organizaciones no gubernamentales de ayuda, colaboran bajo la dirección del CRN. Las necesidades de cada departamento son objeto de evaluación. Como ejemplo de esta coordinación, en el departamento de Quiché, en la frontera con Honduras, se construyen 17 escuelas primarias, mientras que, juntamente con el CACIF (el organismo privado relativo del comercio, la industria, las finanzas y la agricultura), se aplica un plan para aumentar la producción de las pequeñas explotaciones agrícolas en esa zona. Asimismo, en un valle del contiguo departamento de Zacapa existe un cultivo de 850 acres, que permitirá la creación de una cooperativa de 400 miembros. El trabajo experimental de la vida ha permitido comprobar que 80 de las 160 variedades ensayadas son viables. En el anexo VI del presente informe se

indican por departamento el número y tipo de proyectos concluidos en el período de junio a noviembre de 1983- dos proyectos concretos, las nuevas aldeas de San Juan Acul, cerca de Nebaj, Quiché, y Yalijux, Alta Verapaz (véase el párrafo 7«3») equivalen al reagrupamiento y reconstitución de colectividades enteras; en el primer caso los fondos procedían de instituciones financieras centrales y en el segundo eran fondos del CRN y de los propios pobladores. En Acul intervienen quince organismos.

5.12.12. En la actualidad se están preparando proyectos más importantes, el primero de los cuales afecta a una zona de 50.000 hectáreas, una hacienda de propiedad del INTA, en Chocón, hacia el interior de Livingston, en el departamento atlántico de Izabal. El número de habitantes es de 13.500, algunos de los cuales por lo menos son kekchis inmigrados de regiones más occidentales. Los objetivos son concluir la operación en coordinación con la colectividad local, verificar Improductividad de la zona y lograr una mayor autosuficiencia en productos alimenticios de primera necesidad. En las zonas de bosques se prevén cultivos como el caucho, el corozo y el cardamomo. El Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) informa que la mejora de las técnicas agrícolas permitiría obtener los siguientes rendimientos de las cosechas (en toneladas por hectárea):

	<u>Técnica tradicional</u>	<u>Técnica mejorada</u>
Arroz	1,04	4,5
Maíz	1,3	3,9
Frijoles	0,6	1,4

La rotación de cultivos comprenderá el achiote, cuyo fruto proporciona vitaminas esenciales. Es evidente que con la mejora de la comercialización y las comunicaciones y el establecimiento de servicios de abastecimiento de agua, educación y sanitarios, el nivel de vida de la población local aumentaría considerablemente.

5.13. El Ministro de Agricultura, que en noviembre acababa de tomar posesión de su cargo, es un edafólogo titular de una cátedra en dos universidades. Hizo suyo este programa rural integrado, además de proyectos de comercialización y riego; todo esto fomentaría también la diversificación de cultivos. No continuaba los planes del Ministro que había precedido a su antecesor en el cargo (en el régimen anterior) de buscar algún sistema en virtud del cual los terratenientes privados compartieran voluntariamente parte de su tierra con los campesinos sin tierras.. Pensó, en cambio, que las tierras propiedad del Estado debían utilizarse para el reasentamiento permanente de la población*. Se me informó, y también pude comprobarlo en los periódicos, de que el INTA ha expedido títulos de propiedad de tales tierras, por ejemplo en Chisec y en Izabal.

6. INDICIOS DE ABUSOS NO RESUELTOS

6.1. Los Tribunales de Fuero Especial

6.1.1J En mi informe provisional se describió el origen de estos tribunales. Al entonces Presidente Ríos Montt le parecían necesarios porque habían sido asesinados más de 80 jueces, magistrados y letrados relacionados con juicios penales y se habían formulado temibles amenazas a otras personas y a funcionarios de la administración de justicia. Esos Tribunales se establecieron por Decreto-Ley 36-82 en julio de 1982; en virtud del Decreto-Ley 111-82, dictado a raíz de la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se añadió un procedimiento de apelación. Los Tribunales especiales duraron poco más de 13 meses, y fueron suprimidos por el Decreto-Ley 93-83, que surtiría efecto a partir del 1.º de septiembre de 1983. Todos los procesos incoados antes del 8 de agosto de 1983 continuarían, pero los de las demás personas detenidas por delitos comprendidos en la competencia de los Tribunales especiales serían traspasados a los tribunales ordinarios. No se tiene noticia de que se hicieran estos traspasos; por otra parte, durante el mes de agosto los Tribunales especiales finalizaron rápidamente la tramitación de varios juicios y recursos de apelación.

6.1.2. Los Tribunales de Fuero Especial han sido duramente criticados desde sus comienzos. Yo investigué a fondo sus procedimientos en junio y julio, hablando con una persona que había pasado por todo el procedimiento y había cumplido su sentencia, con un abogado defensor experimentado y con varios detenidos que se hallaban en espera de juicio en el cuartel de la Segunda Unidad de Policía, con los cuales se me permitió conversar con entera libertad, sin ser oídos por ningún policía. Hablé también con las familias de los detenidos. Llegué a la conclusión de que las críticas estaban perfectamente justificadas. En particular se hace referencia más adelante al fenómeno concomitante de las desapariciones.

6.1.3. Los nombres de los condenados por los Tribunales de Fuero Especial aparecieron en Prensa Libre el 8 de septiembre de 1983 junto con sus delitos. En la lista figuran los nombres de 61 personas, de las cuales se dice que dos han sido puestas en libertad. El estudio de las informaciones revela ciertas contradicciones; por ejemplo, según otras fuentes¹, dos hermanos que figuran en la lista también han sido puestos en libertad, y en cambio no figura el nombre de otra persona que, según me dijo el Gobierno, había sido condenada y más tarde puesta en libertad; tampoco hay referencia alguna a otras dos personas cuyas familias me indicaron que habían sido condenadas y a una de las cuales, yo fui en el mes de junio en el cuartel de la Segunda Unidad de Policía. Las personas condenadas se hallan en la prisión llamada La Granja Penal de Pavón, cerca de la capital. Sus casos suscitaron ciertos problemas que necesitan urgente solución. * Esos problemas se derivan de los siguientes factores: "

- i) La competencia de los Tribunales se refería principalmente a los delitos de subversión, violencia, tenencia de armas y conspiración: no obstante, los Tribunales tenían facultades para ampliar el ámbito de lo criminal, más allá de las disposiciones del Código Penal, de manera vaga e indefinida (Decreto-Ley 36-82, arts. 3 (II) y (III) y 39). Si se hizo esto en algún caso es posible que ahora esté justificada la revisión.

- ii) Muchos de los detenidos han mencionado una característica de la detención por acusaciones comprendidas en la competencia de los Tribunales que constituye una grave violación de los derechos humanos. Tras su detención fueron retenidos para ser sometidos a interrogatorio en diversos lugares y durante ese período las autoridades negaron tener conocimiento alguno de su paradero. Este período podía ser de seis a ocho semanas de duración o incluso más. Algunos me indicaron que habían sido torturados. Las autoridades no les comunicaron que estaban presos hasta después de firmar una confesión. Esa confesión (firmada, como me dijo una persona, en la creencia de que el interesado podría aportar pruebas para invalidarla) parecen haber constituido el centro de los juicios; así obtenidas, su fiabilidad es muy discutible.
- i ü) Los procedimientos hicieron extraordinariamente difícil la tarea de la defensa. Las apelaciones (véase el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) se sustanciaron también en secreto y con arreglo a un procedimiento sumario.
- iv) Las leyes de Guatemala hacen técnicamente imposible la revisión completa de esas causas por la Corte Suprema mediante una nueva audiencia en cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho. El Presidente de la Corte Suprema me dijo que en dos casos se había interpuesto oportunamente un recurso de amparo, en el mes de agosto, cuando la condena y la sentencia del Tribunal seguía sin confirmar; esto retrasó los asuntos hasta la supresión del Tribunal, de manera que la causa fue remitida a un tribunal de apelación ordinario. En otro caso, los tribunales de lo penal sólo pueden revisar las sentencias con arreglo al principio de que debe aplicarse la ley menos rigurosa, y esto ya se está haciendo.

Por motivos, como éstos apoyo firmemente la iniciativa del Colegio de Abogados en favor de la promulgación de la legislación especial necesaria para que todas las personas condenadas en virtud de este sistema obtengan la revisión de su proceso desde el principio*. Los reclusos me invitaron a visitarles para discutir los detalles de procedimiento de los Tribunales de Fuero Especial. Lamento no haber tenido tiempo en esta última ocasión para ir a la prisión. De hecho, como se indicó antes, yo había recibido mucha información acerca del desarrollo de los procesos en esos Tribunales. Y, lo que es más importante, la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre su propia competencia para revisar los procedimientos de dichos Tribunales, sosteniendo que es muy poco lo que puede hacer. En consecuencia, la realidad es que en la nueva legislación debe preverse un nuevo juicio (si así se desea) de conformidad con el procedimiento normal; éste parece ser el remedio más adecuado.

6.2. Desapariciones

6.2.1. Cuando visité el país en junio había un número considerable de denuncias de personas desaparecidas durante la administración de Ríos Montt. Estas denuncias eran continuación de las que se venían haciendo desde hace varios años. Las desapariciones forzadas o involuntarias constituyen una violación de muchos derechos humanos; se dan más detalles en el Capítulo V de cada uno de los Informes del Grupo de Trabajo de la Comisión encargado de este tema (E/CN.4/1435, E/CN.4/1492 y E/CN.4/1983/14) Las cifras actuales se dan en el cuarto Informe del Grupo de Trabajo, que se presentará a la Comisión en su 40^o período de sesiones 4/*

6.2.2- En junio presenté una lista de casos que se habían producido durante los doce meses anteriores entre personas relacionadas con la Universidad de San Carlos, a lo cual el Gobierno respondió indicando que algunas de las personas interesadas estaban o habían estado retenidas para ser juzgadas por los Tribunales de Fuero Especial. Habida cuenta del sistema descrito en el párrafo 6.1.3 ü) señalé en mi informe preliminar que con la supresión de los tribunales probablemente se aclararían varios casos pendientes de presuntas desapariciones, pero no ha sido así. El número de personas que, según se admitió a comienzos del año, fueron retenidas por delitos comprendidos en la competencia de dichos Tribunales excede en mucho de la lista de 61 (aunque me temo que ésta sea incompleta) publicada en Prensa Libre. Sigue habiendo rumores en Guatemala acerca de personas retenidas en secreto, por ejemplo en el Cuartel General de Matamoros (un viejo castillo) o en comisarías de policía.

6.2.3' En noviembre, el Jefe del Estado me negó categóricamente que hubiese nadie en centros de detención secretos o que existieran tales lugares. El Vicerainistro del Interior me indicó que las desapariciones son resultado de la violencia, que habían ocurrido en años anteriores, que la policía no escatimaba esfuerzos para hallar a las víctimas y que el Gobierno trata de evitarlas. Según me dijo, algunas, si no la mayoría, tenían connotaciones políticas; a menudo son responsables la extrema derecha y la extrema izquierda.

6.2.4. La Comisión recordará que en informes del Grupo de Trabajo se ha indicado que otros gobiernos han dado explicaciones de este tipo respecto de las desapariciones ocurridas en sus respectivos países. También se dice que las personas desaparecidas tenían motivos subversivos, que proseguían sus actividades en la clandestinidad o en el extranjero « Aunque haya en esto algo de verdad, ello no explica el hecho de que en muchas de las Anuncias de desapariciones en Guatemala se indica que la persona interesada fue detenida y se especifica el lugar y la fecha. Tampoco quedan explicados así los casos de los tribunales especiales no explicados de otra manera. No parece tratarse de casos de secuestro penal puesto que no hay indicio alguno de que se haya pedido rescate alguno con arreglo al testimonio de muchas familias, a algunas de las cuales he entrevistado personalmente: si se tratará de secuestros políticos, como, por lo general, no se han hallado los cadáveres, probablemente siguen detenidos en algún lugar por sus secuestradores, sean éstos quienes fueren.

6.2.5» El órgano rector de la Organización Internacional del Trabajo, en su informe GB.224/9/17» de noviembre de 1983 examinó una denuncia relativa a la desaparición de la Sra. Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, asesor jurídico de un sindicato, en la que se indicaba que había testigos de su captura y que estaba detenida en la base militar Berlín de Quetzaltenango. El Comité de la OIT expresa su preocupación por el hecho de que después de siete meses de investigaciones policiales no se ha hecho progreso alguno en este caso.

6.3. Una nueva ola de matanzas y secuestros

6.3.1» Los titulares de los periódicos indican que se ha producido un cambio importante entre mis dos visitas. Hoy es relativamente frecuente que haya combates callejeros en los que las víctimas pueden ser también inocentes transeúntes. En otros casos se han encontrado en la calle cadáveres de personas con graves y múltiples heridas; es evidente que a esas personas se les ha dado muerte por alguna razón concreta. Además, se han producido secuestros, generalmente acompañados de exigencias de carácter económico o político a modo de rescate.

6.3.2, Estos fenómenos se vienen reproduciendo desde septiembre y no se limitan a la capital, sino que, según las informaciones, hasta mediados de noviembre de 1983 se han dado también, en mayor o menor grado, en 17 de los 23 departamentos del país. No está nada claro quiénes son los responsables; entre las víctimas figuran una niña en edad escolar hija del Jefe de la Policía de¹ Santa Rosa, un director de un periódico, las hermanas del Jefe del Estado y del General Ríos Montt (las tres fueron puestas en libertad) y 13 ciudadanos, dos muertos y once heridos, que se vieron envueltos en un combate callejero a media mañana en la ciudad de Guatemala el último día de la visita que realicé en el mes de noviembre. Por la libertad del director de un perá*5> dico se ha pagado una cuantiosa suma.

6.3.3. El primer día de la Visita que realicé en el mes de noviembre, el ex Rector de la Universidad de San Carlos fue asesinado a las 8.40 de la mañana en el aparcamiento de automóviles de su facultad por cuatro asaltantes no identificados. Hace tres años fue asesinada también la persona que ocupaba ese cargo, crimen que nunca se aclaró. Los periodistas me preguntaron si yo creía que el último asesinato se había cometido con el fin de aprovechar mi presencia en Guatemala para degradar la imagen del país. A la sazón yo no dudaba y me reafirmo en esa opinión al ver la lista de actos de violencia publicada en Prensa Libre el 21 de noviembre de 1983. El superior de un monasterio situado en Antigua fue asesinado el 7 de noviembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre fueron asesinadas otras 23 personas, incluidos cuatro policías y un soldado; hubo 16 secuestros, 16 heridos, se hallaron los cadáveres de cuatro personas secuestradas y tres cadáveres incinerados en automóviles; una persona secuestrada fue puesta en libertad una vez que su familia pagó una fuerte suma de dinero y fueron detenidas ocho personas. Son estos actos de violencia notorios ocurridos en diversas partes del país así como en la capital: estas cifras no comprenden crímenes de tal naturaleza que puedan considerarse como asesinatos en el seno de familias, normalmente calificados de crímenes domésticos.

6.4. Las actividades del ejército

6.4.1. En el capítulo 4 supra he dicho que admito la veracidad de dos de cada cuatro de las matanzas mencionadas. Se han hecho, por supuesto, otras muchas acusaciones contra las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales se refieren a supuestos incidentes ocurridos en agosto o septiembre de 1983. Durante la visita que realicé en el mes de noviembre traté de investigar personalmente algunas de ellas. Una cuestión que se planteó está siendo investigada por el Gobierno a petición mía.

6.4.2. Sea cual fuere la verdad respecto de ese incidente, no es probable que al Gobierno le hayan sorprendido mucho las desfavorables conclusiones sobre este punto consignadas en mi informe preliminar y repetidas en el capítulo 4. En junio los ministros y otras personas que ocupaban altos cargos admitieron con franqueza que yo iba a encontrar muchas cosas reprobables, que la situación no ha sido "fácil y que el árabe lleva tiempo. Monseñor Flores, Obispo de Verapaz, me dijo que los militares no niegan sus actos arbitrarios sino que más bien tratan de corregirlos.

6.4.3. La disciplina en el ejército viene impuesta por las leyes militares. Bajo el régimen se entregó a cada soldado un código de conducta en el que se establecían reglas obligatorias de conducta ejemplar con respecto a la población civil. Las infracciones de la disciplina se castigan en la práctica. Me dio un ejemplo de ello en Huehuetenango (anexo III, N° 16) un alto mando militar, portavoz del ejército. Dijo que nueve de los soldados de la guarnición habían sido llevadas ante los tribunales y condenados por abusos cometidos con mujeres o robos, soldados que

se hallan en la cárcel. Por entonces (julio de 1983)» un oficial estaba procesado por abuso de poder. En febrero de 1983 desaparecieron en el departamento de Huehuetenango cuatro personas a las que, según se dice, se dio muerte. Fueron acusados del crimen un subteniente y cuatro policías militares a los que se formó consejo de guerra. No sé* cuál fue la suerte de los cuatro policías militares, pero el subteniente resultó absuelto y el fallo confirmado por la 80 Sección de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Quetzaltenango en julio de 1983*. Tengo en mi poder¹ un comunicado de prensa del ejército» Las actuaciones del consejo de guerra y del recurso de apelación son documentos públicos y he pedido que se me dejara verlos pero todavía no están disponibles. Creo que merecen ser estudiados. Se trata de un caso polémico. El comunicado de prensa indica que los dos conductores de autobuses en cuyas declaraciones se basó la causa no confirmaron su testimonio en el consejo de guerra. El oficial presentó una coartada que fue apoyada por miembros de su sección,

6.4.4» Lo que en general está mucho menos claro es la forma en que se comporta el ejército cuando lleva a cabo operaciones contra las guerrillas. En el párrafo 4.4 se ha hecho referencia a la dificultad de diferenciar entre guerrillas activas, quienes las apoyan y campesinos totalmente inocentes. Al quedar refrenada la subversión en el campo el problema se ha reducido pero su carácter sigue siendo el mismo. De las guerrillas forman parte mujeres, niños de unos 12 años, ancianos y hombres jóvenes; poblaciones enteras admiten que cooperan. Las alegaciones afectan ahora a un pequeño número por incidente en comparación con las relativas a los años 1981 ó 1982. No obstante, la acusación sigue siendo la misma, a saber, que el ejército mata a civiles inocentes. En el caso de Acul, mencionado en otro lugar, hace ver hasta qué punto es difícil investigar esta cuestión. Antes de que se iniciara el nuevo asentamiento que hoy existe, la aldea originaria estaba muy dispersa por el valle, cada casa junto a su milpa. Había una pequeña iglesia, una escuela que data de 1976 y una pequeña finca cuyos propietarios, de origen italiano, habían enseñado a los campesinos a hacer queso. El único acceso era un sendero escarpado en el flanco de la montaña que se alza entre el valle y Nebaj. Hace unos dos años se dio muerte, según se me ha dicho, a varios aldeanos. Algunas de las casas más aisladas fueron incendiadas en época relativamente reciente. ¿Quién era el responsable? En ciertos círculos se afirma que fue el ejército; la versión oficial atribuye el incendio a la guerrilla. Esta ha sido una zona de conflicto activo durante algún tiempo. Un aldeano me dijo en noviembre que dos años antes luchaban junto a las guerrillas. Después, una vez que los guerrilleros se habían llevado sus alimentos y les habían maltratado se entregaron al ejército. Yo les vi en el mes de junio pasado cuando acababan de llegar a Nebaj en un estado penoso. En algún momento se habían preparado por lo menos tres trampas, formadas por hoyos disimulados en los que se colocaban estacas puntiagudas, una en el sendero que conducía a la puerta de una casa, otra a la entrada de la iglesia y, si se salvaban estas dos, había otra situada dos o tres metros más allá dentro de la iglesia. Pude ver los hoyos » Por desgracia, cuando llegué a Nueva York no tuve conocimiento de la denuncia de que fue el ejército el que mató a los aldeanos y por consiguiente no hice investigaciones sobre el terreno, pero hay dos organizaciones que podrían ser las responsables.

6.4.5» En relación con esto u otros incidentes similares, cabe afirmar que el ejército tendería a establecer la presunción de que las personas a las que se dio muerte eran realmente culpables de subversión. No tengo pruebas para confirmar o refutar este supuesto. Los guerrilleros podrían tener motivos propagandísticos para presentar la muerte de quienes les apoyan como asesinato de personas inocentes. No puedo hacer otra cosa que repetir que quienes formulan o difunden estas denuncias pueden dividirse en tres grupos: quienes han comprobado los hechos y pueden aportar pruebas convincentes

quienes sinceramente dicen que su información es de segunda mano y precisa verificación; y quienes., en el peor de los casos, no parecen haber hecho esfuerzo alguno para com*, probar si sus afirmaciones son veraces.

6.4-6. Las actividades del ejército en zonas de conflicto han sido una de las causas principales de queja en relación con la violación de derechos humanos en los últimos años. Los gobernantes actuales dieron muestras de disgusto y sorpresa ante las denuncias hechas. No dudo de su sinceridad, pero en la actualidad, de ellos depende en gran parte que el ejército y el país -en general recuperen su buena reputación. Por mi parte, se me ha conducido siempre que lo he solicitado a cualquier lugar, por distante o conflictivo que fuera. Sin embargo, un Relator Especial no puede aclarar todo lo que sucede. Se necesitan datos seguros y mucho más completos.

6«5» Las patrullas civiles

6.5.1. Se trata de organizaciones locales de personas civiles que bajo el control (hoy) del mando del ejército de cada departamento existen en "casi todos los núcleos de población rurales. En algunos lugares son anteriores al régimen de Ríos Montt, pues una de ellas, la de Semej, en el sur de Quiché (anexo V, p. 9)» estaba haciendo preparativos para celebrar su segundo aniversario en diciembre de 1983- El armamento varía según el grado de actividad subversiva en la localidad algunas están dotadas de fusiles del ejército,

6.5.2. El sistema ha sido objeto de numerosas críticas, por ejemplo:

- i) Los hombres de la aldea se ven obligados a incorporarse a ellas, hasta el punto de que la resistencia a hacerlo se interpreta como indicio de tendencias subversivas y se reacciona frente a ella «n consecuencia.
- ii) Los turnos de servicio son duros y alteran gravemente las actividades que normalmente realizan los miembros de las patrullas para mantener a sus familias.
- iii) Las patrullas abusan del poder así obtenido resolviendo viejas disputas y rivalidades por la fuerza, y a veces atacando a otras aldeas,
- iv) Son utilizadas por el ejército como fuerza de vanguardia para hacer frente a los ataques de las guerrillas.
- v) Han sido obligadas, por el ejército a tomar parte en matanzas de habitantes de aldeas vecinas.

6.5.3» Por el contrario, también se afirma que el sistema tiene muchas ventajas. Al proporcionar la primera línea de defensa de una aldea, las patrullas tienen un efecto psicológico beneficioso en cuanto que devuelven la confianza a la población. Actúan con arreglo a unas instrucciones y una disciplina estrictas, impresas en el documento de identidad oficial que se entrega a cada uno de sus miembros; los infractores son procesados y castigados. Sus actividades se limitan a la zona de su propia aldea y no se les permite operar fuera de ella. A sus miembros se les adiestra por lo menos en el uso de sus armas y a veces respecto de los métodos utilizados por las guerrillas, con la intención de que detecten las actividades de los guerrilleros y recurran al ejército en lugar de combatir ellos mismos. La seguridad que ofrecen la patrullas, en particular a comunidades alejadas, permite a la población continuar viviendo en sus aldeas tradicionales, mientras que el ejército seguramente no podría proporcionar esa protección.

6.5.4» Yo no creo que en muchos de estos puntos sea posible generalizar, y no puedo aconsejar a la Comisión que acepte" como crítica de alcance general unos hechos que se refieren a un determinado acontecimiento o a las condiciones de una determinada aldea. El número de personas afectadas es muy grande: el verano pasado eran 66.000 sólo en el departamento de Quiché. No es de extrañar, pues, que existan grandes variaciones, y la situación es mucho más compleja de lo que pudieran hacer pensar algunas observaciones hechas públicas. Es indudable que se han producido abusos y que no todos se han corregido o castigado. También existen variaciones en cuanto a las modalidades que elige el comandante del ejército local en lo que se refiere a la instrucción y las operaciones de las patrullas en su zona.

6.5.5- Paso ahora a formular observaciones sobre las ventajas e inconvenientes antes mencionados.

a) Servicio obligatorio

El grado de presión que se ejerce sobre los miembros de una comunidad para que se unan a la patrulla civil varía considerablemente. Si la comunidad no es numerosa el servicio puede ser una pesada carga a menos que se distribuya entre muchos, de manera que sería inadmisibles negarse a participar. En otro caso, el mando militar local puede dictar órdenes, como indica la prensa que ocurrió en el departamento de Guatemala en noviembre de 1983: se dice que se publicó una circular por la cual se exigía la incorporación de todos los hombres de 18 a 50 años aun cuando trabajasen en la capital, incluidos los fines de semana. El no hacerlo se consideraría como indicio de tendencias subversivas.

No está claro ni mucho menos que una modalidad de servicio militar local, como la que constituye el programa "Fusiles", parte del programa "Fusiles y frijoles" sea contraria al ejercicio de cualquier derecho humano. No obstante, la obligación debe describirse oficialmente y deben hacerse las excepciones oportunas. La amenaza de considerar la objeción a estos servicios como indicio de alguna relación con la delincuencia o la subversión constituye, dada la situación actual de Guatemala, una amenaza a la libertad y seguridad de la persona.

b) Dureza del servicio

La frecuencia con que los miembros de las patrullas han de prestar servicios varía mucho; he aquí algunos ejemplos:

San Cristóbal Verapaz (anexo III, N8 11), una vez cada 12 días (los 75 miembros dijeron concretamente que ellos eran voluntarios y que a los empleados el empleador les pagaba su salario mientras se hallaban de servicio).

Semej (anexo V, NQ 5) una vez cada 14 días.

Pachimulin (anexo V, NQ 6), una vez cada dos meses.

Lancetillo (anexo V, NQ 3) una vez cada cuatro días (preferirían una vez cada ocho días).

La variación es reflejo del personal disponible y la amplitud de la insurrección en la zona. No cabe duda de que esta forma de servicio impide a los hombres

(y en algunos casos también a las mujeres cuando éstas son miembros de la patrulla) trabajar en sus tierras, obligando al resto de la familia a trabajar durante ma's horas. Por otra parte, los patrulleros civiles de tono el altiplano afirman que ^as patrullas son útiles para asegurar la paz y elevar la moral. A este respecto vale la pena señalar que en el pasado otoño hubo una gran cosecha, hasta el punto de que el Jefe del Estado me dijo que habría que comprar los excedentes a un precio de intervención para su ^distribución por el CRN, Es verdad que desde el avian se podía apreciar el remanente de la cosecha de maíz en numerosas parcelas; se me dijo que algunas de esas zonas no habían sido cultivadas hasta hace poco, un año quizás. El sistema de patrullas de civiles, debe haber contribuido a, esta mejora de la seguridad y de la productividad.

c) Abuso de poder

Son muchas las denuncias formuladas en relación con el abuso de poder, pero tampoco son fáciles de comprobar. Propongo que se pida al Gobierno que investigue un incidente ocurrido en el sur de Quiché acerca del cual obtuve en noviembre información de primera mano. En mi informe preliminar describí otro incidente ocurrido en febrero de 1982 en otro lugar del mismo, departamento en la municipalidad de Quiché. Según la prensa, una patrulla civil local, se quejó de ser hostigada por la patrulla de la aldea vecina Q de la municipalidad vecina. El incidente se centra en la detención de un patrullero al, que le cortaron una oreja. Esta versión fue confirmada por el comandante de la zona militar de Quiché, quien dijo que la patrulla de la aldea vecina acusaba a la víctima de almacenar alimentos en un lugar secreto para entregarlos a los guerrilleros, por lo que fue detenida y encerrada. Después de una fiesta, miembros de la patrulla en estado de ebriedad y un policía atacaron al patrullero y le cortaron una oreja. Fue llevado a una clínica y los atacantes fueron procesados, y condenados; el comandante de la unidad fue sustituido.

Parece probable que ocurran esos incidentes. Las patrullas están formadas exclusivamente por aldeanos que reciben una formación básica y se hallan sujetos a la disciplina militar, pero a cierta distancia. En muchos casos comprobé la existencia de un gran espíritu de cuerpo. No obstante se les permite llevar armas cuando están de servicio, lo cual les da un gran poder sobre la población de la aldea. Todo lo indicado en el párrafo 7.1 infra acerca de la conveniencia de un sistema de investigación de los abusos denunciados puede aplicarse tanto a las patrullas civiles como al ejército.

d) Ej. uso de la patrulla como primera línea de defensa

Según el, Gobierno y los mandos militares, las patrullas civiles tienen órdenes concretas de destacar a las fuerzas subversivas que puedan encontrar sino pedir ayuda al ejército. Todo eso está muy bien si hay fuerzas militares en proximidades. Pero son, pocas las patrullas que tienen acceso a un teléfono, mucho menos a la radio y por consiguiente han librado combates sangrientos, como en Agua Zarca (anexo IrXJo Nú 17). Como es natural, cuando muere un patrullero su familia sufre, pero yo no observé ninguna resistencia a tomar parte de una patrulla. En Nebaj (anexo III, Nú 12) fui invitado a acompañar a la patrulla nocturna (pero mis asesores me impidieron hacerlo por considerarlo demasiado arriesgado). Nadie niega que las patrullas constituyen una extensión de la presencia del propio ejército. Lo que se ha de contrastar es el peligro y las penalidades que llevan consigo con la seguridad que deparan. Esta seguridad sólo puede sustituirse mediante el servicio militar general y el despliegue del ejército regular, con grandes posibilidades de que muchas de las mismas personas tuvieran que incorporarse a esas fuerzas lo cual crearía perturbaciones aún mayores para ellos y para sus familias.

- e) Las patrullas son obligadas por el ejército a matar a habitantes de las aldeas vecinas

No he descubierto nada que esclarezca este tipo de acusación. Sin embargo, conviene señalar que en el incidente de Parraxtut, ocurrido en diciembre de 19^2, hubo una acusación de este tipo. En la reseña publicada se dice que el ejército llegó a la aldea de Chiul, en el municipio vecino de Cunen, a 9*5 ^{kl}P. M- QS9tç de Parraxtut, y convocó a todos los hombres miembros de la patrulla civil*, Comparecieron 350 a los que se dio la orden de marchar hacia Parraxtut donde habrían de dar pruebas de su virilidad. Se les unió un destacamento del ejército, perp ^1 acorralamiento y la matanza de los hombres y después de las mujeres fueron confiados a los patrulleros civiles, que llevaban fusiles proporcionados por el ejército. El origen de este incidente fue, según se dice, el comportamiento de un miembro de la patrulla civil de Chiul. Cuando el investigador antes, mencionado visitó Parraxtut en jynio de 19^^ preguntó concretamente a los aldeanos, si habían tenido algún conflicto con personVw de Chiul y ellos le dijeron que no.. E}._investigador se reunió con la patrulla civil de Parraxtut, un tendero de 60 años y varios de sus clientes, el alcalde y una veintena de aldeanos. De la matanza, de diciembre se dan diversas cifras de víctimas, entre 350 y 500. Puede resultar extraño que todos estos informadores sobrevivieran y cabía pensar que la aldea estuviera^ menos poblada. Ya he dicho que el relato de la matanza de Parraxtut de. diciembre de 1982 me parece falso, lo mismo que la participación de la patrulla civil de Chiul. Sin embargo, cuando se denuncian otros incidentes de este tipo yo recomendaría que se llevara a cabo una investigación a fondo.

6.6. Libertad religiosa

6.6.1. Cuatrocientos cincuenta años después de la llegada de los conquistadores españoles, Guatemala es un país esencialmente católico- En las zonas indígenas, la Iglesia Católica ha adoptado ciertos aspectos de lo^ festivales y actitudes religiosas precedentes, aunque sin desvirtuar la devoción característica del fervor religioso local. Al mismo tiempo, desde hace poco más de 100 años, el cristianismo protestante ha estado representado en el país por diversas sectas. Al igual que en los demás países de América Central, algunas sectas evangélicas fundamentalistas, caa^ todas de origen norteamericano, han venido realizando actividades proselitistas en Guatemala. En un país donde las divisas son extremadamente escasas, dichas organizaciones son tanto más atrayentes cuanto que disponen de recursos considerables para su labor. El hecho de que el entonces Presidente perteneciera (y pertenezca) a una secta protestante evangélica y de que efectuara emisiones radiofónicas todos los domingos por la tarde, me llevó a averiguar, principalmente en julio, si las sectas protestantes o sus fieles ejercían algún tipo de presión o influencia indebida.

6.6.2. Pese a que ahora la cuestión ya no tiene importancia práctica, mis investigaciones pueden resultar de interés. Ni en Guatemala ni en el extranjero se me hizo sugerencia alguna de que haya existido ningún tipo de relación política entre el protestantismo, las políticas oficiales y la ayuda de origen estatal. El Arzobispo interino de Guatemala (interinato debido al fallecimiento del Cardenal Casariego, ocurrido pocos días antes de mi llegada) consideraba que las **creencias religiosas** del entonces Presidente servían de aliento a los protestantes evangelistas del país, pero no sólo en el plano nacional, sino como parte de una campaña norteamericana mucho más amplia dirigida desde los Estados Unidos de América. No cabe duda de que los fondos y recursos de que disponen las sectas protestantes han inducido a parte de la población a unirse a ellas. Sin embargo, aparte de ello y hasta donde pude

determinar, el protestantismo no es un factor de divisiones. Hay congregaciones protestantes florecientes en lugares tales como Escuintla (anexo III, NQ 2) (a uno de cuyos servicios religiosos tuve oportunidad de asistir, lo que me permitió escuchar un sermón que habría resultado aceptable en cualquier congregación cristiana del mundo); además, tuve oportunidad de visitar una aldea recién reasentada llamada El Buen Samaritano (anexo III, NQ 8), antes mencionada, donde los protestantes habían permanecido unidos y contaban con la protección del ejército.

6.6.3. Cualesquiera que fuesen las relaciones entre el protestantismo y el Gobierno bajo la presidencia del General Ríos Montt, el actual-Jefe del Estado evidentemente considera que existía una relación demasiado estrecha, y en agosto reafirmó la separación tradicional de Iglesia y Estado.

6.6.4» No todas las confesiones de Guatemala tienen acceso en la misma medida al derecho a manifestar las creencias religiosas mediante el culto, la observancia y la práctica. La administración de los ritos protestantes puede hacerse en forma más amplia que los de la Iglesia Católica. En las zonas rurales hay una aguda escasez de sacerdotes católicos. La diócesis de El Quiché fue disuelta hace algunos años, el obispo se jubiló y un nuevo obispo acaba de asumir el cargo. Lamenté que el Arzobispo interino no pudiera proporcionarme información pormenorizada sobre la situación actual» pero ésta se me fue aclarando a medida que avanzaba la visita. Se han formulado reiteradas acusaciones de que a comienzos del decenio de 1980 el ejército atacó a sacerdotes y catequistas y confiscó bienes eclesiásticos» No dudo de que ello sea cierto, pero en la actualidad se están devolviendo dichos bienes cuando así se pide. Por lo demás, el ejército sostiene que al utilizar ciertos edificios evita su destrucción, y en Chajul (anexo III, NS 13) observé que venía a corroborar esa afirmación.

6.6.5. No obstante, las actividades del ejército tenían una razón de ser. Durante el período del Presidente Lucas García, la política oficial indudablemente consistía en realizar una violenta campaña contra los guerrilleros, política que al parecer se aplicó también durante los primeros meses de la presidencia del General Ríos Montt, y hay pruebas irrefutables de que ax'uob o-dü'uueb y catequistas católicos ée la Ebonas de conflicto habían adoptado una posición activa en favor de la guerrilla tanto en la enseñanza como en la práctica. En la diócesis de Verapaz se habían distribuido escritos tales como "Cristo Compañero", que el propio obispo desautorizó» De hecho, quienes los distribuían fueron deportados. En la zona central de El Quiché (anexo III, NQ 19) (el triángulo ixil de Nebaj (anexo III, Ne 12)), San Juan Cotzai, (anexo III, NQ 14) y Chajul (anexo III, NQ 13))» los tres pueblos tienen magníficas iglesias, en dos de las cuales hay importantes y veneradas imágenes religiosas. En julio pude ver que seguían abiertas para la práctica individual del culto y se utilizaban para ese fin: había personas orando y velas encendidas. En Nebaj (anexo II, NQ 12) el presbiterio, que resultó destruido por el terremoto de 1976, se estaba reconstruyendo en julio» y en noviembre, desde el exterior, parecía terminado. El extremo oeste de la iglesia de Cotzal (anexo III, NQ 14) estaba repleto de sacos de maíz y de frijoles porque, según me dijo el alcalde, uno hay en cada otro sitio donde almacenar los alimentos suministrados por el Comité de Reconstrucción (no se han producido pérdidas por robo). No hay sacerdotes.

6.6.6» Los 12 miembros de mayor edad del grupo católico indígena de Nebaj, conocido como la "cofradía", relataron cómo el sacerdote pasó a apoyar activamente a las guerrillas, con las que se encuentra actualmente en las montañas, acompañado de su

sacristán. Se dice que en Chajul (anexo III, Nâ 13) ocurrió lo mismo» En San Juan Aci (anexo V, NQ 2), salvo en el caso de la escuela, no se produjeron daños durante el período en que la aldea quedó abandonada. En noviembre se utilizaba como lugar de almacenamiento y pernoctación. Se me dijo también que el sacerdote se había unido a las guerrillâs.

6.6.7. Hasta que el nuevo Obispo pueda nombrar sacerdotes, un sacerdote irá de vez en cuando a las aldeas que visité* en ambas ocasiones para celebrar la misa, pero muy de tarde en tarde. A la población le resulta sumamente difícil hacer la primera comunión, contraer matrimonio, recibir los últimos sacramentos o recibir sepultura en ceremonias cristianas. De igual modo, al llegar a San Lucas (anexo III, Nú 21) en la zona oriental de Alta Verapaz 5/ encontré a muchos de los aldeanos realizando a su manera el oficio religioso dominical sin la presencia de un sacerdote.

6.6.8. No creo que pueda ponerse en duda que ciertos elementos de la iglesia católica llegaron a sentirse tan decepcionados ante la imposibilidad de introducir reformas sociales en las zonas indígenas, por medios legítimos, que se mezclaron en las actividades subversivas. Esta afirmación no se hace a la ligera. Cuando la oí por vez primera, hace unos dos años, en boca de Luis Eduardo Pellecer Faena, que había sido sacerdote jesuita, en una videocassette su relato me pareció difícil de creer. Ahora figura, junto con sus respuestas en la conferencia de prensa que siguió a su declaración, en el documento-E/CN.4/1501, anexo, páginas 14 a 55» ^Confirman esa opinión las declaraciones que he escuchado de personas pertenecientes a todos los niveles de la jerarquía de la Iglesia Católica. La corrobora también la mención (página 23) de Fernando Hoyos, antiguo jesuita español. Tengo un folleto publicado recientemente por el EGP en el que se dice que fue miembro de la dirección nacional de esa organización y se habla de sus actividades; resultó muerto en una importante confrontación con el ejército en Choczunil, Huehuetenango, en junio de 1983.

6.6.9. Aparte de ese caso son muchas las denuncias en las que se afirma que el ejército ha hostigado, secuestrado o dado muerte a sacerdotes y catequistas en diversas partes del altiplano. Dado el apoyo abierto o encubierto prestado por muchos de ellos a las actividades subversivas no es de extrañar que así sea, aunque no he comprobado cada uno de los casos. Tampoco es fácil aceptar que todo ataque a sacerdotes y catequistas sea justo. Persiste la escasez de sacerdotes nuevos, sean nacidos en Guatemala o, como era frecuente en otros tiempos, procedentes del extranjero, que iban a remediar esa carencia del país. Me temo que las sospechas suscitadas en los últimos años no se disiparán con facilidad. Los que sufrirán esta carencia serán muchos de los católicos del Altiplano, que actualmente no gozan de las libertades religiosas mencionadas en el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

6.6.10. En noviembre, miembros de la secta Hare Krishna me pidieron que apoyara su solicitud de inscripción en Guatemala como institución religiosa. Tal solicitud se les ha denegado, pero han interpuesto recurso de apelación. Sin duda su caso se estudiará* cómo es debido.

5/ Véase A/38/485, párr. 116.

7. PREOCUPACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

7.1. Problemas de verificación

7.1.1. De la lectura de ciertos pasajes de los capítulos 4 y 6 y del capítulo presente se desprende que, estoy al corriente de numerosas alegaciones que no he podido investigar, cada vez que algunas de ellas, cuando ha sido posible una encuesta, han resultado falsas, lo parece prudente que yo avale ninguna de ellas sin verificarlas. Los informes de lo que ha venido ocurriendo en Guatemala varían desde relaciones equilibradas y objetivas de las personas que han pasado períodos considerables de tiempo en el país y que explican cómo que ellas mismas vieron y oyeron a acusaciones dramáticas de atrocidades. He leído cuidadosamente todos los documentos disponibles y doy las gracias a las personas que se han tomado la molestia de entregarme o enviarme copias de sus propios informes, los informes hablan por sí mismos y la Comisión puede juzgar por los testimonios presentados, hasta qué punto puede confiar en su contenido» Invito a la Comisión a que verifique mi propio informe con la misma minuciosidad.

7.1.2. La realidad de la situación es que muchas de las violaciones denunciadas parecen haber ocurrido en lugares sumamente remotos o inaccesibles. Otros informes mencionan el nombre de una pequeña aldea, sin indicar el término municipal y ni siquiera el departamento. En Guatemala hay numerosos lugares que se llaman San Francisco o Semuy. En general, no es fácil llegar al lugar indicado sin ayuda y, a decir verdad, sin permiso del ejército. Es muy dudoso que ni siquiera en helicóptero pudiese aterrizar lo suficientemente cerca para visitar una aldea elegida por mí.

7.1.3. Todo esto deja mucho que desear desde todos los puntos de vista. La falta de una verificación fidedigna dificulta cualquier evaluación por la comunidad internacional; tampoco contribuye a la reputación de Guatemala; sobre todo, significa que no se hace nada para lograr que las autoridades comprendan las razones para insistir en los derechos humanos: no se trata de un sentimentalismo liberal, sino del respeto de la vida y de la dignidad humana que, si alguna vez existió en el caso de las poblaciones indígenas, ha desaparecido prácticamente durante dos decenios de violencia. No dudo que hay muchas personas en las altas esferas del Gobierno que comprenden esto muy bien. Su tarea consiste en conseguir que sus propias ideas sean compartidas universalmente. La alternativa puede ser un círculo vicioso, en el que algo que puede haber sido un pequeño incidente se exagera y denuncia en tonos estridentes en todo el mundo, ante la imposibilidad de competir con esta propaganda o de demostrar de manera convincente lo que ha ocurrido realmente, las autoridades tienden a cerrar los ojos y los ojos. La inacción conduce a la indiferencia y el incidente siguiente puede ser mucho más grave. Los abusos, si no se investigan, pueden multiplicarse.

7.1.4. La labor de investigar las acusaciones de derechos humanos de los individuos corresponde normalmente a los órganos de las Naciones Unidas. Únicamente las autoridades nacionales disponen del tiempo y de los recursos necesarios para hacer una investigación completa. En consecuencia, yo sugeriría que los gobiernos presten atención a la idea de crear algún órgano para desempeñar esta tarea. Se está demostrando actualmente en Guatemala que es posible crear instituciones imparciales y aotadas de, lutoridad. Un ejemplo es el Tribunal Electoral Supremo. Quiero señalar también que el Presidente de la Corte Suprema me tranquilizó en junio con respecto a los tribunales

como resultado de los nuevos nombramientos, me dijo, es esta la primera vez en la historia del país en que la Corte Suprema ha roto sus vínculos con los partidos políticos y otros intereses privados. Actualmente trabajo con un tribunal competente fiable. No me corresponde a mí manifestar una preferencia decidida por un sistema determinado. Quizá la nueva institución pueda crearse en torno a la actual función del Fiscal General, con recurso a los tribunales. Esta sería una evolución orgánica fuertemente arraigada en la historia y en las constituciones anteriores, mi verdadera preocupación es evitar las sospechas de que todo investigador o crítico se inspira en sus simpatías por la subversión lo que anularía la eficacia de esta institución.

7.1.5» Al mismo tiempo existe la necesidad urgente de acabar con las formas de violencia citadas por ejemplo en los párrafos 6.2 y 6.3. El clima de temor que ello crea indica una vez más que algo anda muy mal. La prueba de que estos actos no son inevitables en Guatemala es que las matanzas y secuestros desaparecieron prácticamente con el régimen de Ríos Montt. La apertura política proporciona otro conducto a las ambiciones políticas; sin duda en Guatemala como en otros países la certidumbre de la detección es el mejor método de evitar el crimen. Esta parece, pues, ser otra prioridad entre las atenciones del Gobierno.

7-2. Los refugiados en México

7.2.1. En mi último informe provisional me referí a mi visita a dos campamentos de refugiados en el Estado de Chiapas, en el sur de México. Esta información se repite a continuación. Sin embargo, la situación ha cambiado hasta cierto punto desde julio de 1983. En mi última visita a Guatemala, el Ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las enormes diferencias en las estimaciones del número de personas en cuestión, que variaban de 6.000 a 100.000 según la fuente. A mi juicio, debería hacer un censo completo en México. A mediados de diciembre recibí de la Misión de México ante las Naciones Unidas en Nueva York los resultados de un censo hecho el 11 de octubre de 1983 por COMAR. Este censo mostraba que había 70 campamentos con 38.352 refugiados, a saber, 9.593 hombres, 9.369 mujeres, 9.776 muchachos y 9.618 muchachas. Con ocasión de mi visita me informaron de que algunos acababan de llegar en mayo de 1983; el Gobierno mexicano dice que la cifra, sigue aumentando, aunque el Gobierno de Guatemala no aceptó esto en la Asamblea General.

7-2.2. El problema de los refugiados es objeto de activas conversaciones entre los Gobiernos de México y Guatemala. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también participa. Las propias actividades de los refugiados en México tropiezan con ciertas limitaciones prácticas, aunque estos refugiados cooperan en proyectos destinados a promover su autosuficiencia. En términos generales, no hay duda de que, al igual que en el caso de otros muchos refugiados, los derechos humanos sufren. Sin entrar en detalles, sin embargo, nada indica que los actuales esfuerzos del Gobierno de México y del ACNUR para velar por su alimentación, salud y educación estén por debajo del nivel que cabe razonablemente esperar. Se plantean otras cuestiones sensibles como consecuencia de la presencia de un número tan elevado de guatemaltecos que viven en las inmediaciones de la frontera de México, pero estas cuestiones quedan fuera de mi mandato.

7.2.3. Al parecer en otro de los campamentos, los refugiados procedían de una serie de puntos en Guatemala, incluidas pequeñas aldeas. Visité dos de los principales campamentos, Puerto Rico y Chajul, situados en la selva pluvial subtropical junto al Río Lacantún. La población del campamento Puerto Rico (anexo IV NS 4) (llamado así por el río que lo atraviesa) procedía de cooperativas situadas no muy lejos de la frontera en la zona delxcán, al norte de El Quiché. Los refugiados del campamento de

Chajul (anexo IV, NS 5), originalmente vivían y trabajaban en cooperativas en una zona del departamento de El Quiché situada más al sur, en el municipio de Chajul, de donde viene el nombre del campamento. Cada comunidad original de la cooperativa tiene su jefe y portavoz, y conserva su individualidad. Aunque la historia se ha relatado a muchos visitantes, no se trata de una repetición a coro bien aprendida, ya que otros miembros de los grupos pueden corroborarla con detalles útiles y concordantes.

7.2.4= El relato de los refugiados de estos dos campamentos comienza con la salida de sus pequeñas aldeas nativas, dispersas en una extensa zona del altiplano. Habían oído decir que se estaban distribuyendo tierras en las dos zonas antes mencionadas, y las cooperativas se habían formado durante la presidencia del General Laugerud García, una fundada por un sacerdote católico y la otra por un coronel del ejército. Las tierras pertenecían al Estado, y poco a poco se habían establecido cooperativas agrícolas avanzadas que contaban con edificios e instalaciones para la comunidad. Se producían y se vendían cultivos comerciales para aumentar los ingresos familiares; al principio estos cultivos se transportaban a los mercados por avión. Los pobladores podían comprar sus propias parcelas en el asentamiento mediante pagos anuales que estaban a su alcance.

7.2.5» Posteriormente, en un período que abarca entre 1979 y 1981 empezó a llegar el ejército, al principio en pequeños destacamentos. Su función era hacer una evaluación detallada de las comunidades con fines de obtención de información, y su injerencia se fue haciendo cada vez más agresiva, hasta que culminó en un gran número de secuestros y asesinatos ocurridos en 1981 y a comienzos de 1982 en ambos grupos de cooperativas. Los sobrevivientes y otras personas del resto del grupo huyeron; a algunos de ellos les llevó bastante tiempo llegar a México, en tanto que otros no abandonaron completamente sus cultivos por largo tiempo y se quedaron viviendo en chozas en sus tierras o en las montañas. Algunos se refugió a los alrededores de Puerto Rico. Anexo IV, N2 4) ~nb~ "llegaron hasta" mayo de 1983; hasta entonces habían estado viviendo en la periferia de la cooperativa o quemando porciones de bosque para abrir claros en que sembrar sus cultivos; durante este período fueron hostigados por el ejército, especialmente mediante patrullas en helicópteros,,

7.2.6. Hay dos aspectos de la situación de estos refugiados sobre los cuales desearía formular algunas observaciones, aparte de señalar que las razones que se esgrimieron inicialmente para destruir esas empresas florecientes se remontan a un período que no he titado de investigar:

- a) En las zonas de Ixcán (anexo III, NQ 7) i y Chajul (anexo III, N2 15), en Guatemala, ha habido considerable actividad guerrillera. En los primeros meses de la administración de Ríos Montt, el ejército proseguía su resuelta campaña para erradicar la subversión, por lo que no debe sorprender que se haya sospechado que la población local que furtivamente seguía atendiendo sus cultivos estuviera ayudando o por lo menos apoyando a los guerrilleros. En esta época no parece haber existido ningún medio de comunicación eficaz entre el ejército y la población indígena;
- b) Incluso posteriormente, en 1983 los datos provenientes de otras partes del altiplano, distantes de la frontera, indicaban que los guerrilleros obligaban a la población local a sembrar cultivos alimentarios para ellos en zonas taladas de bosque. Estas parcelas son claramente visibles desde el aire y se han considerado signos de actividad subversiva. Por lo tanto, no cabe sorprenderse de que el ejército haya acusado de subversivos, hostigado y perseguido a civiles de la zona de Ixcán (anexo III, N2 75) totalmente

inocentes, que habían sido desplazados como refugiados internos y que se dedicaban á sembrar maíz en claros del bosque. Es muy posible que estos refugiados llegados en último término hayan sido víctimas de la ardua campaña que sin cesar enfrenta al ejército y a los guerrilleros.

1-7.2.7. La mayoría de las personas que han visitado los campamentos concuerdan en que los refugiados que se mostraban dispuestos a hablar sobre su situación han dicho que les gustaría volver a los asentamientos que deoaron, ya se tratara de aldeas o de cooperativas. Tuve la impresión de que las personas que se encontraban en los dos campamentos que visité sabían que sus cooperativas habían sido destruidas y estarían dispuestos a aceptar el reasentamiento, sobre una base cooperativa, en cualquier otra parte disponible en condiciones razonables. Después de todo, en los últimos 10 años, ellos mismos se habían desarraigado de stfs lugares de procedencia para integrarse a las cooperativas originales y no demostraban ningún deseo de retornar a sus pequeñas aldeas. Sin embargo, lo que sí exigían era cierta seguridad para el futuro. Corresponde a otros organismos de las Naciones Unidas investigar y tratar de resolver este problema. Desde el punto de vista de los derechos humanos, su regreso a Guatemala puede ser provechoso, ya que les permitiría participar en los programas de reconstrucción que se están llevando a cabo. No obstante, su situación no es muy distinta a la de los refugiados internos. Tienen motivos fundados para temer al ejército, y ese temor se justifica aún más por los contactos que, según estimo, siguen existiendo entre los guerrilleros y los campamentos. Por otro lado, es probable que haya agentes del Gobierno tratando de convencerlos de que regresen. Como consecuencia de ello, Estos refugiados demuestran la misma perplejidad e incertidumbre que experimentaban los refugiados internos con quienes hablé en la época de su desplazamiento a las montañas. Esta era mi opinión del año pasado. Cualquiera que sea la situación actual, debe darse prioridad a las medidas para que los refugiados puedan si lo desean, regresar a Guatemala, y, para poder tomar esta decisión hay que conocer la situación actual dentro del país. En enero de 1984 había indicios de que el Grupo Contadora apoyaba la creación de una comisión con miembros de diversos países para abordar este problema.

7*3" Aldeas protegidas o modelo

7r~5*1. La fiasta muy recientemente la población Indígena de la zona rural del altiplano terd-Ca a' vivir en comunidades muy dispersas. Desde el aire pueden verse las casas aisladas en las montañas y bosques, con una parcela de terreno y un largo camino o _ocaso zigzagueante. Incluso en los asentamientos mayores, las casas están a menudo muy dispersas. No sólo es imposible proteger a la población así diseminada, sino que también resulta difícil proporcionarles una infraestructura y unas instalaciones modernas. Según se indica en otra parte del presente informe, un gran número de aldeanos de las zonas rurales se convirtieron en refugiados internos, y la política del Gobierno consiste en reasentarlos, al menos inicialmente, en aldeas mayores. Para ello se están construyendo nuevas aldeas o ampliando las existentes. Las ventajas desde el punto de vista de la mejora del nivel de vida se exponen en el capítulo V.

7-3'2. Estas aldeas están generalmente guardadas por el ejército; en algunos casos la población necesita pases para salir de la zona o los necesitó en alguna ocasión. Esta situación ha dado lugar a graves críticas que pueden tal vez resumirse en un pasaje de un informe reciente de un órgano eclesiástico muy respetado: "nos mostraron fotografías de refugiados internos rodeados de alambradas en campamentos del gobierno en la zona de Alta Verapaz, donde viven centenares de campesinos sumamente atemorizados bajo un astricto control militar". (Lío se indica el emplazamiento.) Esto parecería sugerir que tales aldeas forman parte de un plan de militarización a largo plazo de la zona rurale

7*3.3* Durante las dos visitas recorrí varias aldeas nuevas, reconstruidas o ampliadas, guardadas por el ejército y otra (en la que se denunciaron dos casos concretos de abusos del ejército) en la que ya no había ninguna presencia militar. Visité asimismo muchos campamentos de refugiados internos durante mi visita del verano, con frecuencia en alojamientos provisionales. Consciente de la connotación que tiene la frase aldea "protegida o modelo" como consecuencia de los acontecimientos en Viet Nam o Zimbabwe (en donde tengo poca experiencia personal) reconozco la preocupación. La dificultad está en evaluar si esta preocupación está justificada. Si de lo que se trata es de cortar las comunicaciones y el apoyo a las guerrillas no hay duda de que el Gobierno admitirá que estos asentamientos son eficaces. El apoyo activo o pasivo de la población rural es bien conocido como "el agua en que nadan los peces", y hay que recurrir al ejército para negar este apoyo a la subversión.

7.3.4- Se había insistido mucho en que era muy poco probable que me contasen toda la verdad durante mi visita al altiplano. Se dijo que la presencia del helicóptero, del personal armado acompañante, aunque en su mayoría o en su totalidad iban vestidos de civil, como ocurrió en mis dos visitas, y la presencia a menudo de miembros de un destacamento del ejército, limitaban las posibilidades de que me dijeran la verdad. El Gobierno respetó mi solicitud de que me acompañara el mínimo posible de elementos de la fuerza armada. No hay indicaciones de que a la población le asustase el helicóptero; tomé mis propias fotografías que reflejan la reacción de los aldeanos ante el aparato y no indican preocupación alguna, sino que muestran más bien la curiosidad de los niños asomándose al interior, una vez en tierra, y una congregación muy normal a su llegada y salida. Tanto durante la visita del verano al triángulo de Ixil, que incluye Nebaj, Cotzal y Chajul (anexo III, N^{os} 12, 14 y 13) como durante la visita de un día en noviembre que pasé en Chiraaltenango, Solóla y Quiché del sur, viajé en jeeps con la enseña de las Naciones Unidas o en automóviles con placas de matrícula privadas. En Cobán y San Cristóbal Verapaz (anexo III, A^{os} 9 y 10), viajé en automóvil privado con dos o tres oficiales uniformados.

7-3»5« Es imposible decir hasta qué punto las personas que hicieron declaraciones estaban cohibidas. Cabe hacer cuatro observaciones.

- a) Si la labor del Relator Especial consiste en reunir información para la Comisión, viajando para ello extensamente y celebrando conversaciones a través del país, resulta difícil ver cómo puede realizarse esta labor de manera más discreta. Yo estaba obligado a decir quién era; el Gobierno estaba obligado a prestarme protección (que mi equipo y yo apreciábamos debidamente); con un calendario muy apretado, solamente en avión y helicóptero podían recorrerse este terreno y esas distancias.
- b) Aunque hasta cierto punto era necesario que advirtiese por anticipado los lugares que deseaba visitar, sólo en Nebaj (anexo III, N^o 12), se había organizado una recepción: algunos grupos habían solicitado verme y estaban esperando en la pista de aterrizaje. Aparte de eso no hubo otra indicación de organización previa; al contrario, al parecer mi llegada fue más bien inesperada. En Choatalum, en el norte de Chimaltenango (anexo III, N^o 22) llegamos el domingo por la tarde; el alcalde estaba en su casa y hubo que ir a buscarle; otras personas se fueron sumando gradualmente a la reunión. En Chuabaj (S. Quiché) y Setzacpec (Alta Verapaz) (anexo V, N^{os} 8 y 5) hubo que recorrer la aldea y sus alrededores para encontrar personas con quien hablar.

- c) En toda conversación con un grupo de personas se advierte fácilmente la atmósfera reinante. En Guatemala la muchedumbre tiende a permanecer silenciosa mientras están de acuerdo con lo que dice el orador. En caso contrario, se alzan voces de protesta. Es imposible permanecer en pie rodeado de personas que escuchan con gran interés, sin captar indicaciones de tirantez, tensión o temor, o la ausencia de estos sentimientos.
- d) Fueron muchas y diversas las personas con quienes hablé en diferentes ocasiones y en diferentes sitios, y entre ellas hubo mujeres y niños además de hombres; los interlocutores fueron elegidos al azar. Muchas de las personas con quienes hablé durante el verano eran refugiados internos, recién llegados hacía un día aproximadamente tras permanecer largo tiempo en las montañas. Los lugares visitados estaban muy separados. Es imposible creer que se hubieran puesto de común acuerdo para responderme con una respuesta de propaganda gubernamental.

MI conclusión es que tal vez haya habido algunas reservas, pero que en general la aplicación estaba dispuesta a hablar con gran franqueza. No puedo aceptar que las respuestas que me dieron fueran en todo caso falsas o medio falsas o que la información que me proporcionaron fuera totalmente carente de crédito.

7.3»6. En consecuencia, relataré lo que vi y oí en una serie de asentamientos.

- a) En tre3 pequeñas aldeas en Ixcán, al norte de Chiche, situadas a unos 25 kilómetros de la frontera de México. Los habitantes habían abandonado sus hogares, pero en junio de 1983 habían regresado en general y estaban reorganizando sus vidas. En Cetón (anexo III, fig 6), había asimismo unos 24 refugiados internos recién llegados de otra aldea denominada Ixloco, que habían sido descubiertos por una patrulla civil después de pasar dos años en las montañas; se pensaba que gradualmente se integrarían y asentarían en la comunidad. Una empresa privada acababa de establecer una pequeña planta de elaboración de cardamomo en la aldea. En las cercanías, en Santiago Ixcán (anexo III, fig 7) el ejército había reasentado a un grupo de Ixils tras una larga ausencia como refugiados en el departamento de Huehuetenango; se había construido una pequeña clínica a la que asistía un doctor 20 días al mes, y se estaba construyendo una pista de aterrizaje. La tercera aldea, El Buen Samaritano (anexo III, fig 8) seguía bajo la protección activa del ejército, tanto en torno al asentamiento como en el campo. Treinta soldados velaban por los 160 habitantes del grupo. Se disponía de materias primas para la construcción de casas y había una pequeña escuela abierta 20 días al mes. 110 había alambradas de espino.
- b) Chisoc, en el norte de Alta Verapaz (anexo III, fig 10) es un importante asentamiento que consta de tres grupos de viviendas de construcción reciente. Solicité visitarlo porque se había sugerido que los habitantes eran objeto de coacción. Todos los asentamientos originales habían sido destruidos y en la actualidad los habitantes se habían reunido en una comunidad más compacta. Se había llegado a la fase 2 del PAAC: se habían construido varias viviendas, cada una de ellas con una parcela de 14 por 40 metros. Los zapadores del ejército habían construido un pozo y la comunidad había fijado como prioridades de infraestructura el suministro de agua por tuberías y un sistema de alcantarillado. Aunque las existencias originales de ganado, aves y abejas se habían perdido, se habían facilitado 12 pollos a cada familia y en junio

se les había concedido la posesión de parcelas adicionales de terreno cerca de las aldeas para nuevos proyectos agrícolas. En noviembre supe que en esta zona el INTA había concedido títulos definitivos de propiedad. Esta comunidad no estaba desmoralizada ni aterrorizada. Llegué* sin avisar en medio de un banquete en que estaban presentes todos los dignatarios locales; posteriormente hubo danzas tradicionales. Nadie prestó mucha atención al destacamento militar, al helicóptero o a mi equipo, aunque el alcalde y otras personas explicaron sin dificultad los hechos resumidos antes.

- c) El 12 de julio de 1983 visité Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul, en Quiché central (anexo III, ^25- 12, 14 y 13)- Todas estas aldeas han crecido con la llegada de refugiados procedentes de la zona rural circundante. En Nebaj me entrevisté con un grupo de 40 personas procedente de una aldea denominada Pualy (anexo III, NQ 15) situada junto al camino que conduce a otros dos pueblos, y que a juzgar por su apariencia había sido incendiada un año antes aproximadamente. Estas personas hubieran deseado regresar, pero al igual que otras de estos pueblos reconocieron que esto no era posible ni seguro. De momento estaban contentos de permanecer en Nebaj. Sus hijos estudiaban en ixil y (más tarde) en español en la escuela primaria, pues habían olvidado todo lo que habían aprendido antes con los maestros que llegaron a Pulay. En Cotzal me entrevisté con dos refugiados de las aldeas de Chisis y Xecal respectivamente. Dijeron que sus aldeas habían sido destruidas y que permanecerían en Cotzal para buscar trabajo. En Chajul había un grupo de mujeres y niños supervivientes de una batalla entre las guerrillas y la patrulla civil en que los miembros de la patrulla habían resultado muertos. Un grupo de Ixils igualmente desamparados que encontré en Nebaj habían abandonado su aldea en Acul.

En estas zonas había contingentes del ejército, pero no había señales de alambradas. Había caminos uías o menos practicables que conducían hacia el sur y comunicaban las aldeas entre sí. Existía un servicio de autobuses evidentemente muy usado.

- d) La situación en Mentón (anexo III, ÎIS 18) no difiere mucho de la de Chisec. La vida se estaba normalizando después del abandono completo de la ciudad tras los ataques de las fuerzas subversivas, consistente en asesinatos de personas seleccionadas, incendios de casas, propagandas y amenazas (el alcalde, en funciones antes y después de estos acontecimientos, había sido objeto de amenazas desde el momento en que anunció su candidatura). Después de sufrir destrucciones masivas, incluidos los edificios municipales, la ciudad fue reconstruida en gran parte y la mayoría de las familias habían regresado, permaneciendo las restantes en léxico de donde habían regresado las otras.

Se había reanudado el servicio de autobuses a la ciudad de Huehuetenango. Se observaba la presencia de fuerzas militares, pero no había indicios de restricción de movimientos.

- e) En Verapaz, una persona de gran autoridad, no relacionada con el Gobierno, me dijo que había campos de concentración en que los refugiados estaban rodeados de alambradas y necesitaban pases para salir. Nombró tres de estos campos, todos ellos remotos. Reconoció que no los había visitado y que conocía la connotación de la expresión "campo de concentración". Desgraciadamente no pudo acompañarme cuando tres días más tarde visité una de las aldeas

designadas, San Lucas (anexo II, JQ 21), situada en la zona de la frontera norte de Verapaz-Izabal, cerca de Telemán, a decir verdad una zona remota. Los habitantes son Kekchis; habían vivido en ocho aldeas de las proximidades y siguen trabajando sus tierras tradicionales aunque viven en un núcleo central protegido por un peqaíio continente del ejército. La patrulla ci vi acompaña a veces a los que trabajan en los campos de la periferia. Visité los límites de la aldea (y tomé fotografías). No había alambradas, salvo un tramo pequeño y oxidado dentro del asentamiento que servía para guardar a un, vaca solitaria. Bra cierto que el teniente del ejército expedía los pases de salida a las personas que deseaban asistir al catecismo o jugar al fútbol fuera de la aldea. Nunca se habían denegado estos pases y su objeto era probar al ejército o a la patrulla civil que la persona en cuestión tenía un motivo legítimo para salir. Había actividad de guerrillas en la región; el día antes de mi visita los habitantes de San José, una de las ocho aldeas originales, habían descubierto personas extrañas armadas que recolectaban el maíz en las parcelas de las aldeas y que huyeron al acercarse la tropa.

- f) San Juan Acul (anexo V, NQ 2). En este valle vivían los Ixils que yo háüTa visitado en julio en ílebaj. Hoy nan regresado, junto con los Quiche's de una aldea denominada Chualuj al otro lado de las montañas próximas; había unas 450 familias en total. Esta combinación había dado lugar inicialmente a ciertos problemas, ya que existe una rivalidad tradicional entre los Ixils y los Quienés; sin embargo, en noviembre todos parecían cooperar. El proyecto es ambicioso? no sólo se desarrolla rápidamente sino que las casas en construcción tienen suministro de agua, electricidad y un nuevo camino de acceso por el que llegan los camiones. Dispone de tierras de propiedad privada y comunal y de un vivero de árboles para replantar en su día las laderas desnudas de las colinas a fin de obtener madera y leña. Había presente un contingente del ejército: el 26 de agosto, dos días después de su llegada, se produjo un ataque de las guerrillas; desde que se instaló la población civil se han producido dos nuevos ataques. El alcalde fue elegido por una mayoría de 128 votos entre cuatro candidatos por sufragio universal. En los primeros días se exigían pases para salir del asentamiento, pero en noviembre se habían suprimido. No había alambradas de espinos ni vallas de ninguna clase.
- g) Yalijux, en la región central de Alta Verapaz, es un proyecto CRW. Las casas dispersas se están reagrupando a lo largo de una calle central y la población local está construyendo una carretera de acceso de 32 kilómetros de longitud. Participan 160 familias procedentes de los asentamientos originales de Yalijux y Tzalamíla. Existe un centro sanitario y un edificio comunal para actividades múltiples. No visité personalmente el valle, pero una colección de fotografías de aficionado permite ver claramente que las únicas vallas existentes son las barreras de demarcación tradicionales de tallos de maíz secos que rodean las parcelas de experimentación de cultivos de frutos y vegetales y otros lugares.
- h) En septiembre estuve en Ginebra y fui invitado a entrevistarme con un joven que decía proceder de la zona sur de Chimaltenango. Dijo que en una aldea denominada Pachimulín (anexo V, fíis 6) el ejército había impuesto un sistema represivo de pases, y que un coronel tenía una hacienda que había ido ampliando mediante expropiación de la tierra de los aldeanos. Me advirtieron que para llegar a la aldea había que hacer una larga caminata. En realidad hay un camino adecuado con un servicio de autobuses a unos dos kilómetros de la

aldea, do había presentes tropas del ejército nunca se han exigido pases. Un coronel retirado tenía una pequeña propiedad en las cercanías, pero nunca "había expropiado tierras a nadie; en todo caso ya no vivía allí. Los aldeanos se mostraron tan asombrados ante mis preguntas que tuve que presentar un documento escrito indicando mi condición y las razones de mi encuesta para que pudieran explicar la situación a su alcalde.

7.-3»7« Se indican todos estos detalles de manera prolija debido a que ciertos hechos, como el sistema de alambradas y de pases, no son tan difíciles de verificar como otros. Los mapas adjuntos muestran la zona de que se toman los ejemplos citados. No encontré indicios de limitaciones físicas indebidas. La mayoría de las aldeas se encuentran en zonas en que continúan los conflictos, por lo que la presencia militar es apenas sorprendente por razones tácticas y para proteger a la población civil. Está última tal vez aspire a vivir en sus viejas aldeas, pero no ignoran los beneficios del desarrollo de las instalaciones que conlleva la concentración de la población. Sin embargo, la razón por la que esta cuestión se reseña en este capítulo es que únicamente el tiempo podrá decir si se ha impuesto alguna forma de control militar a largo plazo. Mientras duran las incursiones y ataques de las guerrillas, el ejército permanecerá indudablemente; en muchos de los proyectos de desarrollo participan también unidades técnicas. Sin embargo, tal vez la Comisión desee proseguir su estudio de la cuestión.

f.4. Libertad de expresión

f.4»1* Una contribución importante a la estabilidad sería la libertad para que todos los partidos políticos hagan campaña libremente en las próximas elecciones. Esto se aplica sobre todo a los partidos del centro o de izquierda. Es inquietante oír que tres dirigentes del partido demócrata cristiano han sido asesinados recientemente en las proximidades de la capital. Este es un partido que ha denunciado la violencia endémica. Lo que está en juego no es sólo un importante derecho humano sino también el funcionamiento político adecuado de la sociedad guatemalteca.

f.4»2. Junto a este derecho existe la libertad de prensa. A juzgar por las noticias editoriales, así como por la persistencia con que me interrogaron los periodistas, sobre la impresión en noviembre de que los diarios tenían más confianza en su libertad que la que parecían tener en junio. Esta es sin duda la política actual del Gobierno, una vez más la expresión y la forma de tratar las opiniones controvertidas en las próximas elecciones servirá de prueba crucial de esta libertad. Evidentemente la violencia inhibe la libertad de expresión, directamente e indirectamente a través de la presión financiera que suponen las sumas enormes exigidas por el rescate de un editor secuestrado.

f.4»3» En la fase actual no es posible llegar a una conclusión en cuanto a la forma en que progresa este derecho humano. Deberá mantenerse la vigilancia.

J*5* Sindicatos ~ Libertad de asociación

f.5-1« Reconozco que el presente informe no trata debidamente de esta cuestión, aunque celebré conversaciones con sindicalistas en junio y noviembre, gran parte de la documentación prometida todavía no ha llegado.

7.5*2. El movimiento sindical ha mostrado siempre tendencia a organizarse sobre una base local y por lo tanto fragmentaria. Ha resultado afectado como consecuencia de los sucesivos estados de sitio o de alarma. Incluso ahora la reactivación del movimiento se encuentra en una fase inicial, aunque el jefe de Estado me dijo en noviembre que pronto se autorizará a los sindicatos a actuar libremente. Se permitirá a dos sindicatos y ocho confederaciones que inicien sus actividades.

7»5«3• No hay acuerdo en cuanto a la forma en que debe organizarse el movimiento. Se ha propuesto una confederación nacional, que cuenta con algún apoyo dentro del país y de los sindicalistas en el exilio, aunque estos últimos están de acuerdo más bien con la idea que con las personas que la encarnan. Sin embargo otro sindicalista mostró* su desacuerdo con el proyecto, prefiriendo unas organizaciones más pequeñas.

7.5.4. No hay duda de que una de las fuentes de la dificultad de los organizadores sindicalistas es la tendencia a equipararlos automáticamente con los comunistas o agitadores subversivos. En mayo de 1982 el (a la sazón) Presidente Ríos Montt dijo "Hemos visto en cada sindicalista un enemigo, un PGT, un FAR y no sé qué más, cuájale en realidad es un simple trabajador".

7.5»5« Así pues, este es otro derecho humano cuya evolución habrá que vigilar. Por el momento no cabe sacar conclusiones definitivas, salvo que hay margen para progresar considerablemente.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Mi mandato consiste en estudiar a fondo la situación de los derechos humanos en Guatemala. No pido disculpas por haber dedicado gran parte del presente informe a temas que habitualmente no figuran en las evaluaciones de la situación de Guatemala. A menos que se atenúen considerablemente los problemas económicos, sociales y culturales, gran parte de la población tendrá escasas oportunidades de participar en muchos de los derechos civiles y políticos. El derecho a la vida es la base de ambos Pactos, y se puede infringir tanto como resultado de la pobreza y la falta de asistencia médica como con matanzas.

8.2. La comunidad internacional ha establecido una serie de normas en ambos Pactos. Esas normas pueden considerarse como algo que hay que tratar de alcanzar o como algo que se infringe. Las infracciones pueden enumerarse fácilmente y darse a conocer a la opinión pública mundial. El respeto de las normas, o los esfuerzos por conseguirlo, son menos espectaculares y tal vez menos noticiosos. Una violación ocurre en unas horas; el respeto de las normas puede exigir años de trabajo y un cambio importante de actitudes. Estimo que ambos aspectos interesan por igual a la Comisión, cuyo deseo es tanto estimular como condenar.

8.3. El origen de los trastornos en Guatemala se encuentra en las desigualdades sociales y raciales y en la injusticia económica. Los movimientos revolucionarios han declarado su afán por introducir unas reformas que les parecen necesarias. Sin embargo, el Gobierno ha demostrado algunas iniciativas por lo menos desde comienzos de 1982, orientadas hacia el mismo objetivo.

Recomendación 1. La Comisión debería apoyar los planes de desarrollo rural de los ministerios y organismos del Estado y del ejército, coordinados por el Comité de Reconstrucción Nacional (CRN). Debería vigilar la aplicación de los diversos proyectos, examinar hasta qué punto se han preparado teniendo en cuenta las preferencias de las comunidades afectadas e interesarse por la eficacia de los programas.

Recomendación 2. Entre las cuestiones de especial interés deberían figurar los derechos de propiedad particular o comunal de la tierra, a fin de que la población rural pueda superar una agricultura mínima de subsistencia y obtener mayores ingresos de diversos cultivos comerciales adecuados; el asesoramiento técnico para el desarrollo agropecuario; la educación en las comunidades locales; la asistencia sanitaria, incluida la reducción de la mortalidad infantil,* y la creación de una infraestructura, por ejemplo caminos de acceso y abastecimiento de agua.

8.4. La estabilidad de estas reformas e inversiones tropieza con la amenaza permanente de un clima de insurrección y subversión políticas. La duración de este fenómeno en Guatemala coincide en términos generales con la presencia continua de un gobierno militar. Los consiguientes enfrentamientos armados constituyen un grave fenómeno que ha ocasionado toda suerte de violencias a las personas así como la destrucción de bienes públicos y privados.

Recomendación j. Toda vez que el conflicto interno no se ha resuelto con el triunfo de ninguno de los bandos, el actual proceso de reforma electoral conducente a la celebración de elecciones democráticas justas con miras al nombramiento

de un gobierno de personalidades civiles presenta un interés fundamental para la creación de un ambiente que promueva los derechos humanos de todo tipo.

Nota: Se trata de un dilema real. Todo el mundo quiere elecciones. Sin embargo, el Gobierno ofrece un programa a todas las convicciones políticas, aunque tropieza con exigencias de algunos partidos que tal vez no sea fácil satisfacer*. No obstante, deben estimularse los contactos destinados a persuadir a los principales partidos políticos de participar en las próximas elecciones. Este tipo de problemas se plantea en muchos países que han sufrido violencia interna. Al otro extremo del espectro, la UNRG ofrece también elecciones, pero con la condición de que sean ellos los encargados de organizarlas. Está claro que los que ocupan actualmente el poder nunca aceptarán esa solución.

8.5. Los refugiados, tanto dentro de la propia Guatemala como en México (o en menor medida en otros países) plantean problemas tremendos.

Recomendación 4* Deberían proseguirse todos los contactos necesarios mediante negociaciones con el Gobierno mexicano¹, a través del Grupo de Contadora, de las delegaciones locales de la Cruz Roja o de cualquier otra organización pertinente para reducir los problemas de los refugiados guatemaltecos en el extranjero y permitirles regresar a su país si lo desean.

Recomendación 5. Los refugiados internos deberían seguir siendo recibidos con compasión y asistencia práctica. Deberían proseguir las amnistías. La situación de los" refugiados que regresan es tan grave que se requiere una ayuda considerable para devolverles la salud, proporcionar una educación adecuada a sus hijos y darles la oportunidad de ganarse la vida.

8.6. Muchas de las actividades del ejército, la policía y otras fuerzas de seguridad, como las patrullas civiles, han sido objeto de amplias críticas. Abundan las afirmaciones de que ciertas personas siguen siendo sospechosas, tales como los beneficiarios de las amnistías, algunos sacerdotes católicos, catequistas, monjas y otras personas que ofrecen ayuda (a veces internacional) y los sindicalistas. Todo ello es consecuencia de una polarización política que puede tener una justificación histórica pero que es un mal augurio para la transformación del país. No es posible evaluar** adecuadamente hasta qué punto continúan los incidentes que afectan a esas personas pues no hay manera de comprobarlos. Nada es tan devastador para la confianza interna ni para la reputación de Guatemala en el extranjero como la proliferación de relatos no verificables de todo tipo de horrores perpetrados por las autoridades entre la población.

Recomendación 6. Abundan los rumores, denuncias y desmentidos. Todo esto es muy difícil de confirmar o de negar. La Comisión tal vez desee instar con urgencia al Gobierno para que establezca un sistema de investigación que sea a la vez eficaz y convincente.

El Procurador General tiene la misión de investigar todos los abusos o excesos de jurisdicción practicados por cualquier funcionario del Gobierno contra los ciudadanos. Yo hablé con el Procurador General en junio. Había llevado a los tribunales una irregularidad grave descubierta en su propio

departamento; durante los seis primeros meses del régimen de Ríos Montt se produjeron 5.949 casos de irregularidades administrativas, cifra muy superior a la correspondiente a los últimos seis meses del gobierno de Lucas García. Aunque ya ha terminado la campaña de carteles contra la corrupción emprendida por el general Ríos Montt por considerarse que disuadía a los funcionarios públicos de tomar decisiones-, el actual Gobierno mantiene que no ha reducido la campaña contra la corrupción»

3.7. Hay que alentar activamente a las instituciones estatales nuevas o rejuvenecidas.

Recomendación 7» El Tribunal Supremo Electoral debería proseguir sus actividades y sus dictámenes técnicos deberían ser tenidos en cuenta cuidadosamente por el Gobierno.

Recomendación 6. La Corte Suprema debería estar facultada para revisar las condenas de los condenados por los Tribunales de Fuero Especial, y deberían eliminarse los obstáculos técnicos mediante la legislación adecuada.

8.8. Para favorecer el retorno a la democracia debería hacerse especial hincapié en las necesarias libertades correspondientes.

Recomendación 9» Debería garantizarse la libertad de expresión y de imprenta de manera que puedan expresarse todas las opiniones políticas.

Recomendación 10. No deberían restringirse las actividades de los sindicatos y demás organizaciones ni su contribución a campañas o manifiestos políticos.

Mota: La línea de separación entre la libertad de expresión y la propaganda subversiva parece haberse difuminado últimamente. Todos los que desean expresar opiniones polémicas se exponen a peligros evidentes que deberían reducirse a un mínimo.

Recomendación 11. Deben esclarecerse las desapariciones, los homicidios y los secuestros.

0«9- El informe provisional a la Asamblea General se describió como un informe provisional sobre una situación provisional. La situación sigue siendo provisional, ya que cada semana se producen enormes cambios. En el presente informe he tenido la ventaja de una breve perspectiva histórica. Mi visita en junio y julio me permitió obtener una instantánea inicial de la situación. Desde entonces se ha podido establecer una perspectiva continua gracias a otra visita, a extensos contactos con las personas directamente interesadas y a una abundante documentación.

8.10. Para concluir quisiera establecer un contraste entre las poderosas iniciativas de progreso y desarrollo y los aspectos que concitan una crítica tan virulenta. La historia de Guatemala ofrece muchas ideas maravillosas de reforma social, agrícola y económica. En términos legales o prácticos esas ideas

nunca se han hecho realidad. Ahora esas ideas son más abundantes y su impacto empieza a aflorar. Habría que proseguirlas y consumarlas. Luego, si las fuerzas de seguridad fueran capaces de distinguir a los bebés y a los ancianos de los campesinos de quienes pueda sospecharse fundadamente que participan en la subversión; si sus actividades se ocultaran menos celosamente a una investigación de buena fe, la otra cara del problema dejaría rápidamente de ser tan polémica.

Espero sinceramente que la Comisión fomente un enfoque constructivo de ambos aspectos generales que acabamos de describir.

Anexo I

RESOLUCIÓN 1983/100

La Asamblea General,

Reiterando que los gobiernos de todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Recordando su resolución 37/15^A de 17 de diciembre de 1982,

Tomando nota de la resolución 1-183/37 de la Comisión de Derechos Humanos de 8 de marzo de 1983 en que la Comisión reiteró su profunda preocupación por los persistentes informes relativos a violaciones masivas de los derechos humanos en Guatemala,

Tomando nota también de que en su resolución 1983/12 de 5 de septiembre de 1983 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías reconoció que existía en Guatemala un conflicto armado de carácter no internacional, derivado de factores económicos, sociales y políticos de índole estructural y que/ dentro de dicho conflicto, las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales no habían respetado las normas del derecho internacional humanitario,

Expresando su satisfacción por el nombramiento de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos y tomando nota de la cooperación que ha brindado al Relator Especial el Gobierno de Guatemala,

Tomando nota del informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala presentado por el Relator Especial de conformidad con la resolución 1983/37 de la Comisión¹ de Derechos Humanos de 3 de marzo de 1983,

Acogiendo con agrado la suspensión del estado de sitio y la abolición de los tribunales especiales,

Perturbada por el gran número de personas que han desaparecido, incluidas las que, según se informa, han sido juzgadas por los tribunales especiales y cuyo paradero, a pesar de los llamamientos de diversas organizaciones internacionales, sigue sin conocerse,

1. Expresa su profunda preocupación por las violaciones masivas de los derechos humanos que siguen teniendo lugar en Guatemala, especialmente por los actos de violencia contra no combatientes, la represión generalizada, la matanza y el desplazamiento en masa de poblaciones rurales e indígenas, actos que, según se informa, han aumentado recientemente;

2- Exhorta al Gobierno de Guatemala a que se abstenga tanto de desplazar por la fuerza a personas que pertenecen a poblaciones rurales e indígenas, como de la práctica de obligar a participar en las patrullas civiles » lo que conduce a violaciones de los derechos humanos»*

3- In3ta al Gobierno de Guatemala a que tome medidas eficaces para asegurar que todas sus autoridades y dependencias, incluidas sus fuerzas de seguridad, respeten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales;

4. Pide al Gobierno de Guatemala que investigue y aclare la suerte de las personas que han desaparecido y cuyo paradero sigue sin conocerse, incluidas las que, según se informa, han sido juzgadas por los tribunales especiales;

5* Exhorta al Gobierno de Guatemala a que establezca un sistema para revocar los fallos y las condenas de los tribunales especiales que han sido ya abolidos;

6. Hace un llamamiento al Gobierno de Guatemala para que permita que las organizaciones humanitarias internacionales presten asistencia para investigar la suerte de las personas desaparecidas, a fin de comunicar su paradero a sus familiares y visitar a detenidos y presos, y que les permita prestar asistencia a la población civil en las zonas de conflicto;

7. Hace también un llamamiento a todas las partes interesadas de Guatemala para que aseguren la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario aplicables a conflictos armados de carácter no internacional para proteger a la población civil y tratar de poner término a todos los actos de violencia;

®# Exhorta a los gobiernos a que se abstengan de suministrar armas u otro tipo de asistencia militar mientras continúe informándose de graves violaciones de derechos humanos en Guatemala;

9. Invita al Gobierno de Guatemala y las demás partes interesadas a que continúen cooperando con el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos;

10. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que estudie atentamente el informe de su Relator Especial así como cualquier otra información relativa a la situación en Guatemala y considere la adopción de medidas adicionales para asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en dicho país;

'*** Decide proseguir el examen de la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guatemala en su trigésimo noveno período de sesiones.

Anexo II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, 1954-1982

1. El 3 de julio de 1954 el coronel Carlos Castillo Armas y su ejército del MLN ¹ entraron en la ciudad de Guatemala. El coronel Castillo Armas surgió de una Junta Militar como Presidente Provisional, y posteriormente un plebiscito regularizó su situación. La Constitución de 1945 fue derogada y se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución. La Constitución reformada se aprobó oficialmente el 2 de febrero de 1956. En ella no se permitía la oposición política, y se limitaban considerablemente las actividades de los sindicatos. Los dirigentes sindicales debían obtener autorización gubernamental para organizarse. La Constitución suspendió la vigencia de la ² Ley Agraria. El Estatuto Agrario (Decreto Ley MQ 559) sustituyó a toda la legislación agraria precedente. La mayor parte de las tierras distribuidas en virtud de los programas* agrarios del Presidente Arbenz Guzmán fue devuelta a sus anteriores propietarios. Tras la suspensión de la Ley Agraria, el Gobierno otorgó a todos los propietarios cuyas propiedades habían sido expropiadas el derecho a obtener la revisión de sus casos. En la mayoría de ellos, las decisiones resultaron favorables para los propietarios. El Presidente Castillo Armas fue asesinado en julio de 1957-

2. Tras dos gobiernos provisionales y una elección anulada por el Congreso, fue elegido Presidente el General Miguel Ydígoras Fuentes, quien asumió el cargo el 2 de marzo de 1958. Durante este período la intranquilidad social se había generalizado en varias partes del país. En noviembre de 1960 estalló una rebelión de oficiales subalternos del Ejército, concentrada en la pequeña ciudad de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, sobre la costa del Caribe. Esto dio lugar a la suspensión de las garantías constitucionales y a la declaración del estado de sitio. Cuando la rebelión fracasó, algunos de los militares rebeldes perseveraron en su propósito y, uniéndose a los remanentes del distiello Partido Comunista, crearon varios grupos guerrilleros conocidos como "Fuerzas Armadas Reoeldes", "Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13)" y "Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI)"¹¹. Se llevaron a cabo ataques armados contra varias instituciones públicas y privadas.

3. Esta situación de intranquilidad política se complicó con la designación del anterior Presidente Juan José Arévalo Bermejo como candidato para las siguientes elecciones. La oligarquía conservadora de Guatemala consideró esta candidatura como una amenaza directa a sus intereses particulares y se opuso enérgicamente a ella, sosteniendo que el Gobierno estaba abriendo las puertas al comunismo.

4- En marzo de 1963 un golpe encabezado por el Ministro de Defensa, Enrique Peralta Azurdía, derrocó al Presidente Ydígoras Fuentes y canceló las elecciones convocadas para noviembre de 1963. Se disolvió el Congreso, se derogó la Constitución de 1956, se prohibieron las actividades políticas y

¹¹ Es importante observar que el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) tenía el apoyo de los Estados Unidos.

se mantuvo el estado de sitio promulgado anteriormente por el Presidente Ydígoras. En virtud de una nueva Ley Fundamental, el coronel Peralta Azurdía asumió la Presidencia del país, con facultades legislativas. El Gobierno dictó un Decreto Ley electoral, en el que se establecía que el 24 de marzo de 1964 se celebrarían elecciones para integrar una Asamblea Nacional Constituyente que redactaría una nueva Constitución y allanaría el camino para las elecciones generales. Sólo dos partidos políticos participaron en la Asamblea: el MLN y el Partido Revolucionario (PR). La Asamblea Nacional Constituyente se reunió el 29 de julio de 1964 y su primer acto consistió en votar la anulación formal de la Constitución de 1956, que anteriormente se había suspendido, y en ratificar todos los Decretos-Leyes dictados durante el gobierno del coronel Peralta. El 27 de julio de 1965 el Presidente Peralta levantó el estado de sitio y se permitió nuevamente la actividad política. El 15 de septiembre de 1965 se promulgó la nueva Constitución, que entraría en vigor el 5 de mayo de 1966*. El 6 de marzo se realizaron elecciones generales de Presidente, Vicepresidente y 55 diputados (más 23 suplentes) al nuevo Congreso. Se presentaron como candidatos el coronel Juan de Dios Aguilar de León (Partido Institucional Democrático), el licenciado Mario Méndez Montenegro (PR) y el coronel Miguel Ángel Ponciano Samayoa (MLN).

5. El licenciado Mario Méndez Montenegro se suicidó y fue reemplazado por su hermano, el Dr. Julio César Méndez Montenegro, profesor de derecho. El 6 de marzo de 1966 fue elegido Presidente por el Congreso, por 35 votos contra 9. Es importante observar que el 4 de mayo de 1966 se firmó un acuerdo entre el partido electo y los militares, en virtud del cual el Gobierno acordó observar las leyes que prohibían las actividades de los comunistas y sus aliados, continuar la lucha contra los elementos subversivos hasta obtener su rendición, y apoyar al ejército en todas las medidas necesarias para eliminar la subversión; al mismo tiempo el ejército conservaba una situación de independencia.

6. En agosto de 1966 se aprobó una ley por la que se ofrecía la amnistía a los grupos de guerrilleros, a condición de que se rindieran y se reintegraran a la sociedad. Esta ley fue rechazada por los dirigentes guerrilleros y posteriormente en octubre de 1966 el Gobierno de Guatemala decidió emplear la fuerza militar. Se autorizó a los propietarios y administradores de explotaciones agrícolas y a sus representantes a portar armas, y se les consideró como autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes dentro de los límites jurisdiccionales de sus explotaciones. El 15 de marzo de 1967 se modificó el estado de sitio existente y se promulgó un estado de emergencia, lo que suponía que la situación era mucho menos crítica. El estado de emergencia se levantó dos meses más tarde.

7. En enero de 1968 fueron suspendidas nuevamente las garantías constitucionales por 30 días, debido a la intranquilidad ciudadana, y el 19 de marzo de 1968; el Presidente Méndez Montenegro decretó el estado de sitio, que se levantó en junio del mismo año.

8. A pesar de la vuelta al gobierno civil, en agosto de 1968, se produjeron en Guatemala, actos crecientes de violencia y terrorismo, entre ellos el asesinato del Embajador de los Estados Unidos, Sr. John Gordon Mein y de dos miembros

de la misión militar de los Estados Unidos. También fue secuestrado y asesinado el Embajador de la República Federal de Alemania, Sr. Karl von Spretti. El país se hallaba en una situación de pánico total y la violencia se intensificaba fuera de control.

9. El Presidente Méndez Montenegro designó al coronel Carlos Arana Osorio Jefe de la campaña antiguerrillera.

10. Entre 1966 y 1963 murieron muchos miles de personas en las zonas rurales⁷, principalmente en los departamentos de Izabal y Zacapa.

11. Conjuntamente con la campaña antisubversiva, se organizaron grupos civiles paramilitares para combatir a quienes se sindicaban como guerrilleros. El más conocido de estos grupos fue el Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado (MANO), posteriormente conocido como MANO BLANCA, y el Escuadrón de la Muerte. Estos grupos paramilitares presuntamente capturaron, torturaron y asesinaron a un número creciente de personas sospechadas de sustentar ideas comunistas.

12. En 1968 estos grupos secuestraron al Arzobispo de Guatemala, Mario Casariego, con el propósito de simular que se trataba de la acción de guerrilleros Izquierdistas, pero cuando se descubrió la responsabilidad de MANO el Arzobispo fue liberado. El Ministro de Defensa, el Jefe de la Policía Nacional, coronel Arana Osorio y otras personas fueron destituidas. El coronel Arana fue enviado a Nicaragua como Embajador aunque regresó un año después como candidato del MNL a la Presidencia.

13» El 12 de marzo de 1970 se celebraron elecciones, que se señalaron por el secuestro del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sr. Alberto Fuentes Mohr. De los tres candidatos -coronel Carlos Arana Osorio (Movimiento de Liberación Nacional), Sr. Mario Fuentes Pieruccino (Partido Revolucionario) y Sr. Jorge Lucía Caballero (Democracia Cristiana Guatemalteca)- el coronel Arana Osorio obtuvo la mayoría de los votos. El 21 de marzo de 1970 el Congreso lo eligió Presidente.

14» Tras asumir su cargo, el Presidente Arana Osorio, continuando las operaciones antisubversivas, declaró el estado de sitio y suspendió todas las garantías constitucionales con el propósito de eliminar la insurrección izquierdista en Guatemala por todos los medios necesarios.

15. El número de personas asesinadas y desaparecidas alcanzó proporciones alarmantes. Se estableció un órgano denominado Policía Militar Ambulante. La CIDH pidió información al Gobierno de Guatemala en mayo de 1971, septiembre de 1972 y junio de 1973. El Comité de Personas Desaparecidas informó que el número de desapariciones durante 1970 y 1971 alcanzó a 7000 personas. A la luz de esta grave situación, la CIDH examinó los casos siguientes:

M^a) Caso 1702, presentado en comunicación de 5 de febrero de 1971 en el cual se denuncian varios hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en Guatemala y, en particular, la muerte de numerosas personas durante el "estado de sitio" declarado en ese país a partir del 12 de noviembre de 1970.

b) Caso 1748, presentado en comunicación de 28 de julio de 1972, denunciando también la situación de los derechos humanos en Guatemala y, concretamente las muertes o desaparición de ~~26~~ 25 personas entre noviembre de 1971 y primeros meses de 1972.

c) Caso 1755, presentado en comunicación de 30 de septiembre de 1972, denunciando la detención arbitraria de varias personas, en la ciudad de Guatemala, el 26 del propio mes, sin que hubieren surtido efecto los recursos de exhibición personal interpuestos ante las autoridades judiciales competentes." 2J

16. En octubre de 1973 la CIDH examinó esos casos y designó al Dr. Genaro E. Garrió como Relator. Por recomendación suya, la CIDH pidió al Gobierno de Guatemala que permitiera que una subcomisión reuniera los datos necesarios sobre el terreno. El Ministro de Relaciones Exteriores respondió, mediante un telegrama fechado el 3 de noviembre de 1973, del modo siguiente:

"Gobierno Guatemala respeta y garantiza derechos humanos y en la misma forma en que respeta soberanía demás Estados cuida celosamente la propia. Por lo expresado y por encontrarse el país en plena actividad democrática préelectoral, Guatemala no da anuencia para visita Comisión, especialmente porqué podría prestarse a posibles tergiversaciones por partidos políticos en plena campaña elecciones presidenciales ya convocadas." 5/

17. El 3 de marzo de 1974 se celebraron elecciones presidenciales según lo previsto en la Constitución. El general Efraín Ríos Montt (Partido Demócrata Cristiano) y Alberto Fuentes Mohr obtuvieron la mayoría de los votos. Sin embargo, el Consejo Electoral proclamó resultados diferentes y declaró que ninguno de los candidatos había alcanzado la mayoría absoluta y que el general Kjell Eugenio Laugerud García asumiría la Presidencia- El discutido triunfo electoral del general Laugerud García originó una ola de protestas de fraude electoral.

18. En todo el país se formularon acusaciones. No obstante, como se observará en párrafos posteriores, el Presidente Laugerud alentó, mientras permaneció en el cargo, la formación de cooperativas agrarias, y por primera vez desde 1954 se permitió un cierto grado de actividad sindical, inclusive la realización de huelgas, sin interferencias ni represión. En el informe elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, se afirma; "El Gobierno de Laugerud García, mediante una relativa apertura, dialogó con los partidos políticos y las organizaciones sindicales y logró disminuir la violencia" 4/.

27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diez años de actividades, 1971-1981. Secretaría General de la OEA, Wáshington, D.C., 1982, ¹⁰⁰ pág. 130.

3/ Organización de los Estados Americanos. "Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guatemala" (OAS/SER.L/V/II.53.Doc.12.Rev.2, 13 de octubre de 1981), pág. 1, párr. 2.

4/ Ibid., pág. 115, párr. 9-

19- En febrero de 1976 se produjo un terremoto catastrófico en Guatemala, a consecuencia del cual se declaró de inmediato un "estado de emergencia".^f En junio, el Consejo de emergencia nacional informó que habían perecido cerca de 25.000 personas.

20. Cabe recordar que durante el Gobierno de Laugerud García Guatemala ratificó por Decreto NQ 6-78, de fecha 30 de marzo de 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la reserva siguiente:

"El Gobierno de la República de Guatemala ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1949, haciendo reserva sobre el artículo 4º inciso 4 de la misma, ya que la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54º solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos¹.

21. Con arreglo a la Constitución, el Presidente Laugerud García no podía ocupar dicho cargo durante un segundo período de cuatro años. En las elecciones de 1978 se presentaron como candidatos tres militares. La coalición de centro derecha escogió al general Fernando Lucas García (Ministro de Defensa de 1975 a 1977) como candidato a Presidente y a Francisco Viliagrán Crámer (Partido Revolucionario), como candidato a Vicepresidente. El candidato del partido tradicional, el MLN, fue el coronel Enrique Peralta Azurdía y el general Peralta Méndez el del Partido Demócrata Cristiano.

22. Las elecciones se celebraron el 5 de marzo de 1978. El general Lucas García obtuvo la mayoría absoluta de los sufragios. Con arreglo a la Constitución, el Congreso debía elegir al Presidente. El General Lucas García fue elegido por 35 votos contra ninguno el 13 de marzo de 1978; 26 diputados estuvieron ausentes en el momento de la votación.

23 « Durante el período comprendido entre 1978 y comienzos de 1982, la Comisión de Derechos Humanos recibió, con regularidad, de diversas fuentes, denuncias de violaciones crudas y masivas de los derechos humanos.

24. El 25 de enero de 1979 un miembro del Congreso y ex Ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr, Jefe del Partido Revolucionario Auténtico, fue asesinado mientras conducía su automóvil por el sector céntrico de la ciudad de Guatemala. La comunidad internacional condenó dicho acto de inmediato. En su 35º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la decisión 12 (XXXV) por la que decidió enviar un telegrama al Gobierno de Guatemala a propósito del asesinato del Dr. Fuentes Mohr. La Comisión señaló que vería con agrado que se le informase al respecto.

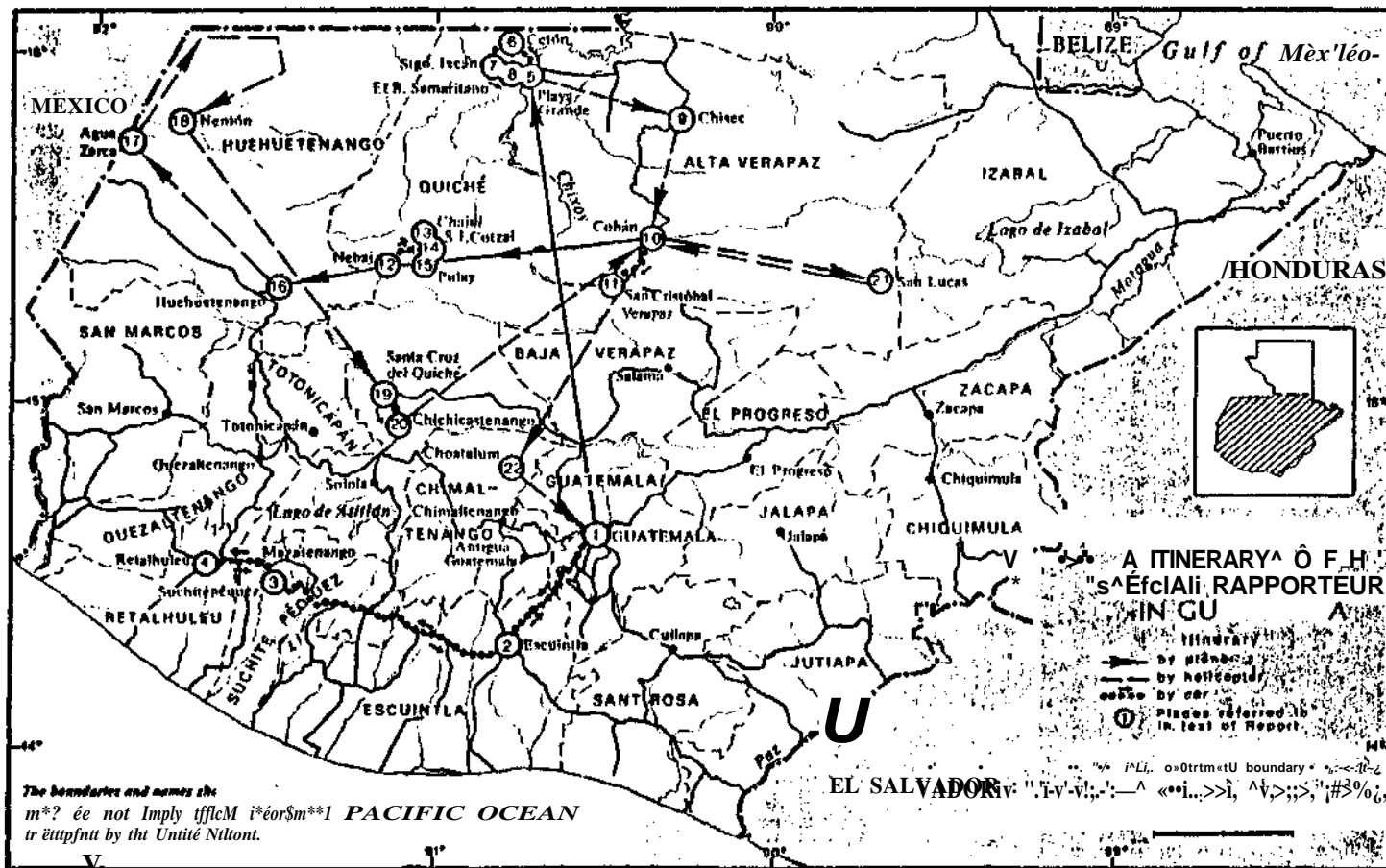
25. Durante 1979 los asesinatos políticos y los secuestros recibieron la atención del mundo entero. El 31 de enero de 1980 habitantes indígenas de El Quiché, ocuparon la Embajada de España en la ciudad de Guatemala. Pese a las peticiones del Embajador de España, y del Ministro español de Asuntos Exteriores, la Policía Nacional atacó el edificio. Treinta y ocho personas murieron, algunas de ellas debido a heridas de bala, y otras a consecuencia del

incendio que se produjo después del ataque. El Embajador y un campesino fueron los únicos sobrevivientes. El campesino sufrió* heridas graves y fue trasladado al hospital. Durante la noche fue secuestrado y a la mañana siguiente fue encontrado muerto. España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. México retiró temporalmente a su Embajador y las Naciones Unidas expresaron su preocupación ante los hechos.

26. La mayor parte de estos actos se atribuyeron a escuadrones de asesinos de ultraderecha, tales como el Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Entre las víctimas de dichos grupos figuraron numerosos políticos destacados. La ola de violencia continuó durante todo el período presidencial de Lucas García. El 1fi de septiembre de 1980, el Vicepresidente de Guatemala, Dr. Francisco Villagrán Crámer, renunció por tener "profundas diferencias con el Presidente en lo tocante a su política de derechos humanos y debido a la preponderancia de la derecha en el Gobierno".

27. En su 3&Q período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos examinó una nota preparada por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 33 (XXXVII), de 11 de marzo de 1981, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. En el párrafo 18 del documento E/CN.4/1501 se indicaba que las principales alegaciones que figuraban en la documentación recibida en relación con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos podían resumirse del modo siguiente:

- a) matanzas masivas de personas por elementos de las fuerzas de seguridad y extremistas armados?
- b) aumento constante del ndmero de desaparecidos y secuestros;
- c) ejecuciones sumarias habituales.



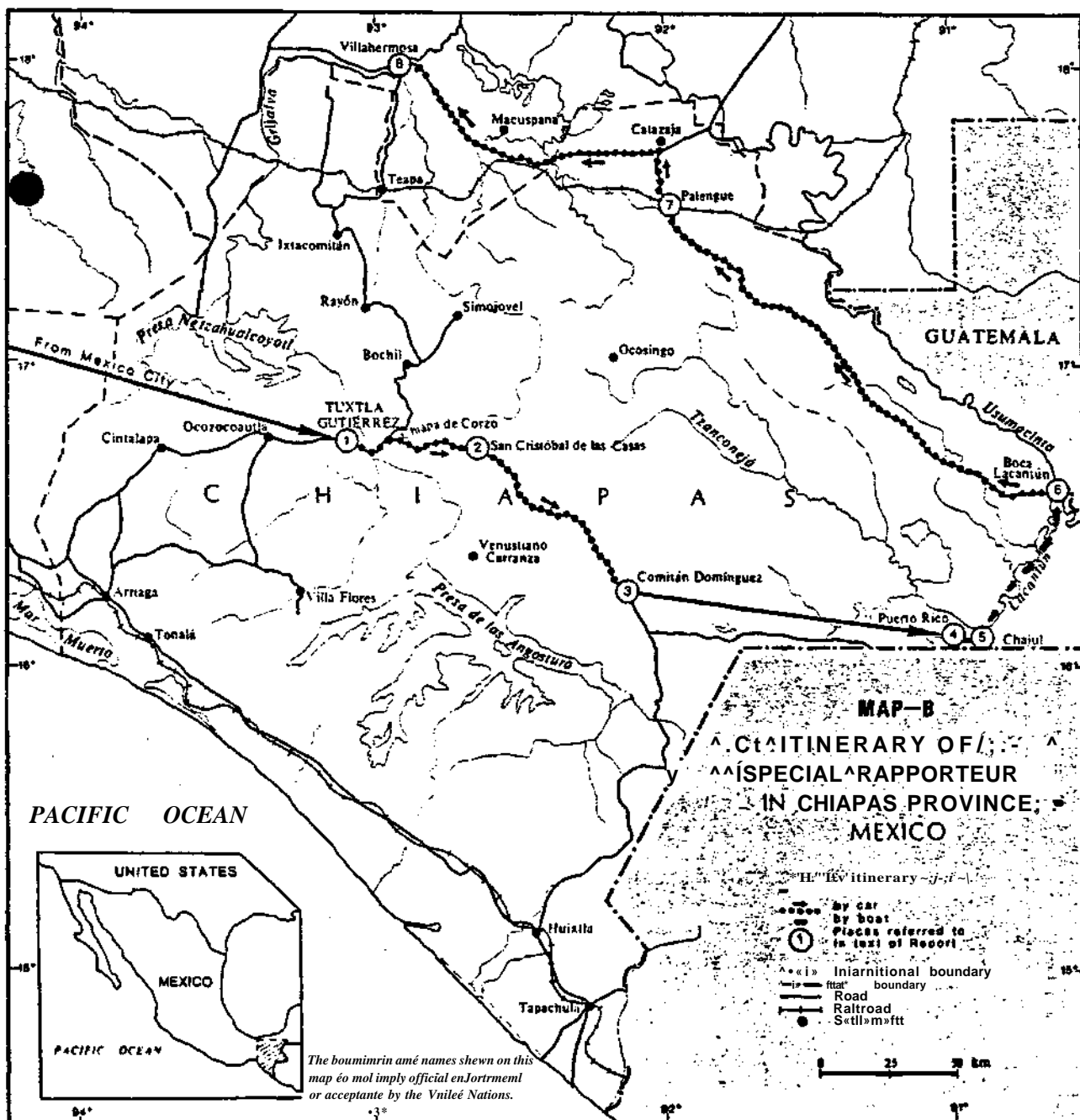
M.P. NO. 1741 UNIO NATIONS
 OCIOBifi 19A3

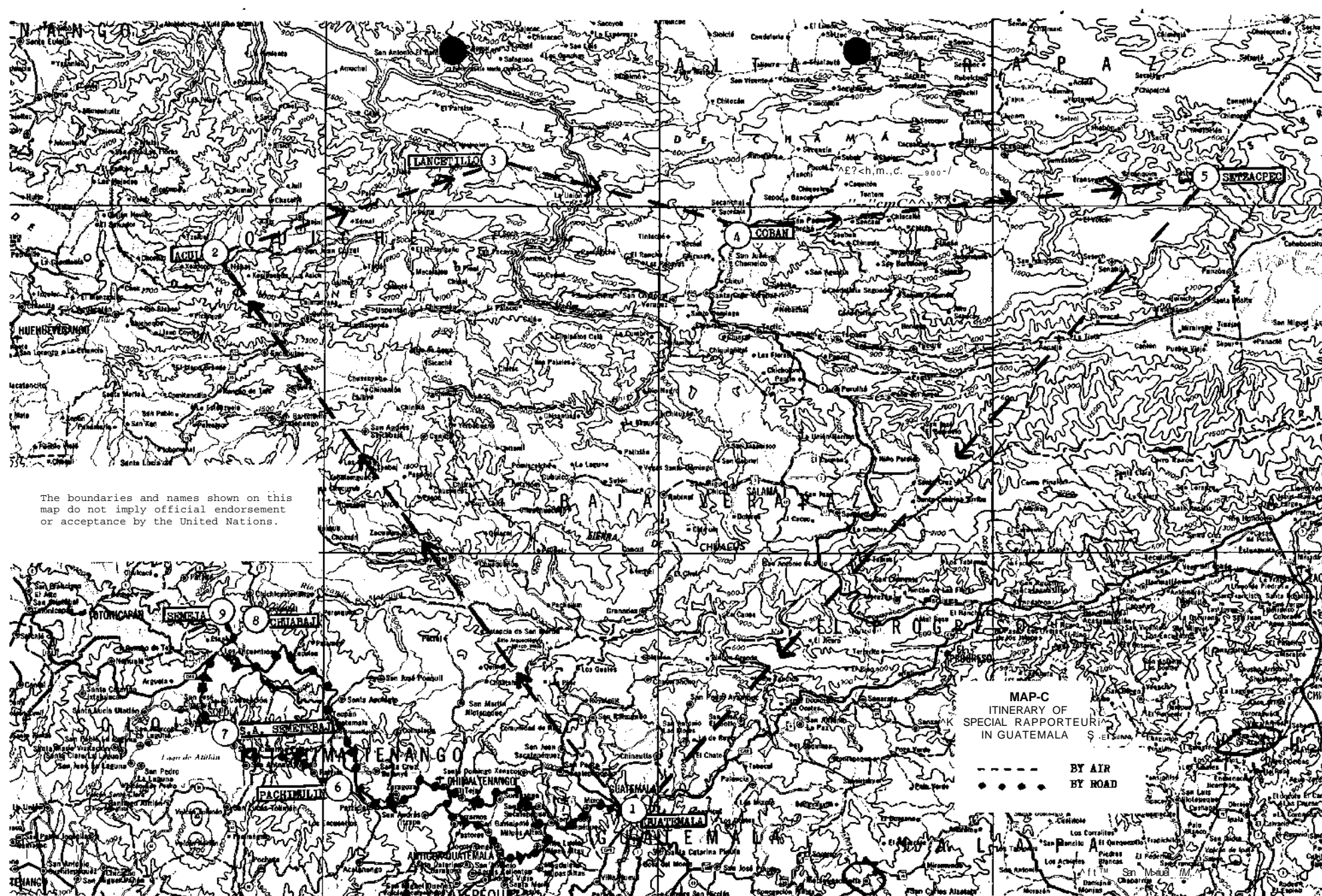
ANEXO III
 ESQUEMA DEL RELATOR ESPECIAL ALA

50. 12984/30
 S O III

Anexo IV

ITINERARIO DEL RELATOR ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MEXICO





The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

MAP-C
ITINERARY OF
SPECIAL RAPPORTEUR
IN GUATEMALA

Anexo VI

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL RURAL

"ProyBcto8 Finalizados y ~~scri~~ EJscucidn"
(da junio a noviembres ds 1983)

AREA CONFLICTIVA	TECNICAS (en m²)	CONST. CARRETERAS	CONST. ESCUELA	CONST. AULAS ESCOLARES	CONSTRUCCIÓN PARQUES	CONSTRUCCIÓN MERCADOS	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS	CONSTRUCCIÓN IGLESIAS	CONST. Y AMP. CAMINOS VEC	AMPLIACIÓN CARRETERA	ORENAJES	PUENTES	ACUEDUCTOS	ALCANTARILLADOS	LETRINIZACIÓN	SALÓN COMUNAL	REPOSICIÓN DE MUERTOS	INT. VIVIENDA ELECTRICA	N.º AULA MORTAL	PISTA ATERRIZAJE	CANCHAS DEPORTIVAS	AGRICULTURA» HUERTOS	CONSERV. SUELOS Y REFOR. 1	REP. LINEAS DE ENLACE	AMPLIACIÓN DE CALLES	CONSTRUCCIÓN ESCRITORIOS	PUENTE "LORENA"	CONST. AUXILIAR. MUNICIPIO	CONST. ESTACIONES	OTROS (limpiapa callas, etc.)	CANT. SUELOS Y BOQUES		
Solóla	115	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0		25	0	
San Marcos	3	3	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	A	3	0	0	2	9	2	0	2		11	0	
Totonicapán	7	0	1	0	1	0	0	0	2	A	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0		10	0	
Chimaltañango	52	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	n	3	0	n	A	0	n	n	n	n	n	n		1	n	
Baja V/Brapaz	2	0	A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		0	0	
Alta VBr.(ChisBc)	102	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i	0	0		A	0	
Yalijux (A. Vera.	160	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		3	0	
Quiche (ixcán)	99	30	16	7	0	1	0	2	1	A	10	0	2	0	0	6	3	0	12	3	9	16	0	0	0	5	A	7	2		22	0	
HuBhuotBnanqo	A6	A	0	A	0	0	0	0	0	5	2	2	0	1	0	3	0	0	0	0	i	5	n	3	i	n	n	n	7		5	0	
QusqaltBnanqo	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	3	n	n		6	0	
El Patán	0	22	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32	0	
T O T A L E Si	586	61	22	13	5	3	1	2	1	16	22	3	5	0	1	7	16	12	0	17	3	11	31	3	5	3	1A	10	7	2		115	0

NOTA» Otrosí Incluyo HmplBza da comsntorioB, da callos, fabrIcacIdn da ladrillos, ote.

/eahh

09
H
B

«•Proyoctos Finalizados y en Ejecución»
(do Junio a novioynbro du J9U3)

$$2H$$
[illegible]



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Comité de Reconstrucción Nacional

Guatemala, C. A.

OFICIO No.	
HECHG	/eehh
UNIDAD	DPSR

ENERO A JUNIO DE 1983:

TOTAL PROYECTOS AREA CONFLICTIVA:	1,231
TOTAL PROYECTOS AREA NO CONFLICTIVA:	250
	<hr/>
	1,461

TOTAL PROYECTOS TECHOS MÍNIMOS AREA CONFLICTIVA:	5,447
TOTAL PROYECTOS TECHOS MÍNIMOS AREA NO CONFLICTIVA:	230
	<hr/>
	5,727

3 JULIO A NOVIEMBRE:

Proyectos Area Conflictiva:	420
Proyectos Area No Conflictiva:	277
	<hr/>
Total:	697

Techos mínimos Area Conflictiva:	586
Techos mínimos Area No Conflictiva:	1,290
	<hr/>
Total:	1,876



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Comité de Reconstrucción Nacional
Guatemala, C. A.

OFICIO No. _____
HECHO <u> /eehh </u>
UNIDAD <u> ~ J E S R ~ </u>

TOTAL GENERAL AÑO 1983 DE ENERO A NOVIEMBRE:

Proyectos Area Conflictiva (Enero a Junio)	1,231
Proyectos Area No Conflictiva (Enero a Junio)	250
Proyectos Area Conflictiva (Julio a Noviembre)	420
Proyectos Area No Conflictiva (Julio a Nov.)	277

TOTAL:	2,178
--------------	-------

Techos mínimos (enero a junio) Area Conflictiva	5,447
Techos mínimos (enero a junio) Area No Conflictiva	280
Techos mínimos (julio a noviembre) Area Conflictiva	586
Techos mínimos (julio a* noviembre) Area No Conflictiva	1,290

TOTAL:	7,603
--------------	-------

NOTAS

En el período de julio a noviembre se iniciaron los proyectos siguientes:

- 1) "ACUL" (Nebaj, El Quiché)
Con coordinación del Sector Público se finalizará el 22 de diciembre de 1983.
- 2) "YALIDUX" (Senahtî, Alta Verapaz)
Se realiza con fondos del CRN y personal del mismo)
- 3) "SANTA MARIA DE JESUS" (Sacatepéquez)
Se realizan proyectos de infraestructura donde está responsabilizado el Estado Mayor del Ejército y el CRN presta un Supervisor y un Promotor Comunal.
Esto se inició desde febrero de 1983.